

INFORME DE LA COMISION MIXTA encargada de proponer la forma y modo de superar la discrepancia producida entre la Cámara de Diputados y el Senado, respecto del proyecto de ley que modifica la Ley General de Cooperativas.

BOLETIN N° 855-03

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:

HONORABLE SENADO:

La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver la divergencia surgida entre la Cámara de Diputados y el Senado, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en la suma, iniciado en mensaje del Presidente de la República.

La Cámara de Diputados, cámara de origen, en sesión de fecha 3 de abril de 2002, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los HH. Diputados señores Francisco Encina Moriamez, Carlos Hidalgo González, Edgardo Riveros Marín, Eugenio Tuma Zedán y Gonzalo Uriarte Herrera. Posteriormente los HH. Diputados señores Riveros y Tuma fueron reemplazados por los HH. Diputados señores Eduardo Saffirio Suárez y Enrique Jaramillo Becker, respectivamente.

El Senado por su parte, en sesión de fecha 9 del mismo mes, designó como miembros de la referida Comisión Mixta a los HH. Senadores que integran la Comisión de Economía, los HH. Senadores señores Jaime Gazmuri Mujica, José García Ruminot, Jorge Lavandero Illanes, Jovino Novoa Vásquez y Jaime Orpis Bouchon.

Previa citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 7 de mayo en curso, con asistencia de sus miembros HH. Senadores señores José García Ruminot, Jorge Lavandero Illanes, Jovino Novoa Vásquez y Jaime Orpis Bouchon, y HH. Diputados señores Francisco Encina Moriamez, Carlos Hidalgo González, Enrique Jaramillo Becker,

Edgardo Riveros Marín y Gonzalo Uriarte Herrera. En la oportunidad indicada, se eligió por unanimidad como Presidente al H. Senador señor Jovino Novoa Vásquez.

A las sesiones en que se consideró este asunto asistieron, además de los miembros de la Comisión Mixta, el subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Alvaro Díaz Pérez, y el Jefe del Departamento de Cooperativas de dicho Ministerio, señor Carlos Rubio Estay.

- - - - -

Durante la tramitación de esta iniciativa se suscitaron varias diferencias entre ambas Corporaciones.

Como se recordará, el proyecto consta de dos artículos permanentes, el primero de los cuales está conformado por 151 numerales que modifican la Ley General de Cooperativas, donde inciden las cuestiones de competencia de la Comisión Mixta. El artículo 2º faculta al Presidente de la República para dictar el texto definitivo, actualizado, refundido, sistematizado y coordinado de la Ley General de Cooperativas. Del acuerdo que proponemos para zanjar las discrepancias habidas, es materia de ley orgánica constitucional el número 61 que se inserta en el artículo 1º del proyecto, modificadorio del artículo 65 de la Ley General de Cooperativas. El resto es ley común.

Analizaremos las cuestiones controvertidas ciñéndonos a los numerales del artículo 1º del texto aprobado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, respecto de los cuales las enmiendas del Senado fueron rechazadas por aquella Corporación.

Número 34

El **artículo 36** de la Ley General de Cooperativas regula los fondos de reserva que deben formar dichas entidades con cargo al remanente, que es el resultado favorable del ejercicio económico anual, según el balance.

La Cámara de Diputados aprobó, en el número 34 del artículo 1º, un precepto de un inciso, que sustituye el referido artículo 36 y permite destinar dicho remanente a absorber pérdidas acumuladas, a constituir e incrementar fondos de reserva, o a ser distribuido entre los socios. La norma de reemplazo es facultativa, no fija un orden de prioridad entre dichos fines y la asignación queda

entregada, en definitiva, a lo que dispongan los estatutos o acuerde la junta general de socios.

El Senado reemplazó dicho artículo por uno de carácter imperativo, compuesto de cuatro incisos.

El primero de ellos señala los fines a los cuales se aplicará el remanente, con indicación precisa del orden en que ello deberá hacerse: 1º, absorber pérdidas acumuladas, si las hubiere; 2º, incrementar los fondos de reserva, y 3º, distribuir el excedente entre los socios, sea en dinero o en cuotas de participación liberadas. En el último caso, conforme al inciso segundo, habrá dos criterios de reparto: los excedentes que provengan de operaciones entre la cooperativa y los socios, se distribuirán a prorrata de tales operaciones; si su origen son operaciones con terceros, se repartirán en proporción a las cuotas de participación de los socios en la cooperativa.

El inciso tercero, hace obligatorio para las cooperativas de vivienda y las de ahorro y crédito formar e incrementar anualmente un fondo de reserva legal no inferior al 20% del remanente. Alcanzada una reserva igual al 50% del patrimonio, dichas cooperativas deberán distribuir entre los socios al menos el 30% del remanente, como excedente; si hay saldo, podrá destinarse al fondo de reserva legal o a formar reservas voluntarias.

El inciso cuarto, faculta al resto de las cooperativas para formar reservas voluntarias, fijándoles un límite máximo igual al 15% del patrimonio.

La primera diferencia que se observa en ambos textos sustitutivos respecto del actualmente en vigor, es que el fondo de reserva legal pasa a ser obligatorio sólo para las cooperativas de vivienda y las de ahorro y crédito.

En segundo lugar, se señala el orden en que se harán las asignaciones del remanente.

Lo tercero, aunque no menos importante, es que se consolida el pago de intereses al capital, con lo cual se fomenta la permanencia en la cooperativa de socios inactivos que, de esa forma, serán estimulados para no retirar sus aportes. Esto ocurre con mayor frecuencia en antiguas cooperativas de producción, tales como las vitivinícolas y las lecheras.

Cabe hacer notar que el inciso tercero del artículo 1º de la Ley General de Cooperativas contiene una norma conforme a la cual los aportes perciben un interés limitado. La Cámara de Diputados eliminó este inciso e integró la idea en el artículo 36, al permitir el reparto del remanente entre los socios.

La Comisión Mixta, en definitiva, aprobó por unanimidad un texto para el artículo 36 que, siguiendo los lineamientos establecidos en el proyecto del Senado, consagra el destino y la secuencia de las asignaciones que se hacen con cargo al remanente y coloca expresamente entre ellos el pago de intereses al capital, lo que se hará de conformidad a lo establecido en los respectivos estatutos y antes de distribuir los excedentes entre los socios. Así se instaura, además, un medio de ahorro e inversión en el sector cooperativo, que debiera impedir la descapitalización de dichas entidades.

Concurrieron al acuerdo los HH. Senadores señores García, Lavandero, Novoa y Orpis, y los HH. Diputados señores Hidalgo, Jaramillo, Riveros y Uriarte.

Números 60, 61 y 62

En estos numerales, el proyecto de la Cámara de Diputados incorpora a la Ley General de Cooperativas los artículos 58, 59 y 60, que vendrían a ocupar el lugar de otros preceptos que fueron derogados por la ley N° 18.018, de 1981, los cuales permitían descuentos por planilla a favor de cooperativas de consumo, de ahorro y crédito y de vivienda.

El **número 60** del artículo 1º del proyecto de la Cámara de Diputados agrega a la Ley General de Cooperativas un **artículo 58**, nuevo, que obliga a los empleadores a hacer descuentos por planilla de las remuneraciones de sus trabajadores que sean socios de cooperativas de los tipos indicados más arriba. La obligación se extiende a quienes pagan pensiones, jubilaciones y rentas o pensiones vitalicias. Hasta aquí los dos primeros incisos del precepto.

Los dos siguientes establecen reglas sobre los límites y la prelación de tales descuentos. En efecto, todos ellos prefieren a los demás descuentos, salvo los correspondientes a impuestos, cotizaciones de seguridad social, cuotas sindicales, obligaciones con instituciones previsionales y organismos públicos y retención judicial a favor de la familia, de hasta el 50% de la

remuneración del trabajador declarado vicioso. Estas son las deducciones establecidas en el inciso primero del artículo 58 y en el inciso segundo del artículo 59 del Código del Trabajo. Además, el descuento para cooperativas de vivienda prefiere a los destinados a cooperativas de consumo y de ahorro y crédito, los que tienen un límite del 25% de la remuneración o pensión líquida, en conjunto; si el trabajador es ya asignatario de una vivienda, el descuento a favor de la cooperativa no podrá exceder del 25%; en los demás casos, el tope es de 15%.

Como se recordará, el Senado rechazó este artículo, medida que la Cámara de origen no compartió.

Los **números 61 y 62**, del artículo 1º del proyecto de la Cámara de Diputados, agregan a la Ley General de Cooperativas los **artículos 59 y 60**, nuevos, que reglamentan la forma de proceder a los descuentos.

Conforme al primero de ellos basta la autorización escrita del trabajador, otorgada para cada operación; es decir, no se requiere la concurrencia de la voluntad del empleador que, como se ha visto, está obligado a descontar, dentro de los parámetros que fija la ley. El agente de retención debe entregar los descuentos a la cooperativa destinataria dentro de los primeros diez días del mes siguiente al del pago de las remuneraciones o pensiones. De conformidad con el nuevo artículo 60, si el obligado no hiciera el descuento o el entero dentro del plazo legal recién indicado, deberá pagar el interés máximo convencional, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera afectarle.

El Senado también rechazó estos artículos en el segundo trámite constitucional, porque son consecuencia del anterior. La Cámara de Diputados, ciñéndose a su predicamento inicial, tampoco concordó con estas supresiones.

Se acordó dejar expresa constancia en este informe, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que el rechazo del Senado a estos tres artículos estuvo motivado por la voluntad de provocar su revisión, a fin de armonizar sus disposiciones con las del artículo 58 del Código del Trabajo, tarea que es posible abordar en este trámite de Comisión Mixta.

Es procedente traer a colación, para el caso de los empleados públicos, que el artículo 91 de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, permite deducir de las remuneraciones de aquéllos, cantidades por conceptos expresamente establecidos por

las leyes. Además, reconoce a los funcionarios la posibilidad de solicitar por escrito autorización al jefe superior del servicio, al Secretario Regional Ministerial o al Director Regional que corresponda, descuentos voluntarios hasta por un 15% de la remuneración, para efectuar pagos de cualquier naturaleza. Para aplicar el límite indicado se tomarán también en cuenta los descuentos por sistema de bienestar, si los hubiera.

En lo tocante al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, los descuentos por planilla están regulados por la ley N° 18.108, que atribuye la facultad para fijar y modificar sus montos máximos a los Comandantes en Jefe y al Director de Carabineros y permite hacerlos a favor de cooperativas de consumo o de vivienda mutuales, entidades aseguradoras y servicios médicos y de bienestar.

Los miembros de la Comisión Mixta hicieron ver su preocupación porque por la vía de estos descuentos voluntarios suele suceder que los trabajadores perciban el día de pago una suma líquida irrisoria y, en algunos casos, queden al debe. Desarrollando la mecánica del artículo 58 del Código del Trabajo, y partiendo de la base que los descuentos legales obligatorios por impuestos y seguridad social bordean el 20%, resta un 80%. De lo anterior vendrían a deducirse el descuento para vivienda, que puede alcanzar hasta un 30%, y otros, para pagos de cualquier naturaleza, hasta por otro 15% del total de la remuneración; si el trabajador compromete los máximos que le son permitidos, a fines de mes recibirá sólo el 35% de su remuneración. A este saldo habría que descontarle, además, lo que autorice la Ley General de Cooperativas. Si se aplicara en su integridad el artículo 58 propuesto en el primer trámite, estos descuentos podrían alcanzar el 40% de la remuneración, jubilación o pensión líquida, de lo que se desprende que se estarían autorizando deducciones de hasta el 105%.

Por otro lado, es indudable que el abuso del mecanismo de los descuentos voluntarios genera problemas económicos, sociales y éticos graves, ya que muchos proveedores no perciben de hecho un mínimo razonable que asegure el sustento del hogar y, en casos extremos, terminan por hacer abandono del mismo.

Teniendo presente que, con o sin un texto legal que autorice descuentos voluntarios por planilla y ordene y priorice el destino de parte de las remuneraciones de los trabajadores, éstos pueden siempre aplicar libremente la totalidad de las mismas a cualquier finalidad, la Comisión Mixta estuvo conteste en que es

preciso dar indicaciones, a través de la legislación, para que las personas ordenen sus gastos conforme a sus ingresos y asuman las responsabilidades consiguientes.

Se tuvo también en cuenta que el mecanismo del descuento por planilla viene de larga data y ha sido apreciado como un factor que robustece a las cooperativas, porque les asegura la recuperación de los aportes y cuotas comprometidos por sus socios.

Tomando en cuenta las reflexiones anteriores, finalmente la Comisión Mixta concordó en la idea de reponer un artículo 58, sobre la base de una propuesta hecha por su Presidente.

El texto que aprobamos presenta las siguientes características: se repone una herramienta de la que las cooperativas han estado privadas en los pasados 20 años, como es la garantía del descuento por planilla de los compromisos de sus socios con ellas; el límite de los descuentos voluntarios por planilla que autorizará la Ley General de Cooperativas a favor de las de consumo y de ahorro y crédito no podrá exceder, en conjunto, del 25%, y sumado éste a los que autoriza el artículo 58 del Código del Trabajo, el total de descuentos voluntarios no podrá ser superior al 45% de la remuneración, jubilación o pensión mensual líquida.

En otras palabras, el descuento voluntario a favor de las cooperativas de vivienda sigue regulado por el inciso primero del artículo 58 del Código del Trabajo, que permite hasta un 30%, y el que se disponga a favor de las de consumo y de ahorro y crédito lo será por el nuevo texto del artículo 58 de la Ley General de Cooperativas, que autoriza hasta un 25%, en conjunto con otros descuentos voluntarios que haya autorizado el trabajador. En ningún caso la suma total de descuentos voluntarios podrá superar el 45%.

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. A él concurrieron los HH. Senadores señores Cariola, Gazmuri, Lavandero y Novoa, y los HH. Diputados señores Encina, Jaramillo y Saffirio.

A continuación, se acordó incorporar a la Ley General de Cooperativas un artículo 59, nuevo, basado en el texto que en su oportunidad aprobara la Cámara de Diputados, con algunas enmiendas propuestas por el señor Presidente.

En virtud del mismo, bastará la autorización escrita del socio, otorgada para cada operación, para que quien paga la remuneración retenga los pagos comprometidos a favor de

cooperativas. Con todo, la norma reitera el límite fijado en el artículo precedente, de modo que el socio no podrá autorizar, ni el pagador retener, montos que infrinjan los porcentajes máximos señalados en el artículo 58 de la Ley General de Cooperativas.

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. A él concurrieron los HH. Senadores señores Cariola, Gazmuri, Lavandero y Novoa, y los HH. Diputados señores Encina, Jaramillo y Saffirio.

Por último, fue desechada la norma contenida en el número 62 del artículo 1º del proyecto de la Cámara de Diputados, que agregaba a la Ley General un artículo 60, nuevo, sobre cobro de intereses y procedimiento aplicable en caso que el agente de retención no enterare en tiempo las sumas descontadas. La Comisión Mixta consideró que es preferible dejar esta materia entregada a las reglas generales sobre intereses moratorios y procedimientos de cobranza.

Lo anterior se acordó en forma unánime por los miembros presentes, a saber, los HH. Senadores señores García, Gazmuri, Lavandero y Novoa, y los HH. Diputados señores Encina y Jaramillo.

Número 67

Incide en el **artículo 65** de la Ley General de Cooperativas, que faculta a la Dirección de Industria y Comercio para clausurar, con auxilio de la fuerza pública si fuera necesario, los establecimientos, oficinas, locales o dependencias que usen indebidamente la palabra “cooperativa” en su denominación.

La Cámara de Diputados reemplazó la referencia a la DIRINCO por otra al Departamento de Cooperativas, que en la actualidad es el organismo competente respecto de dichas entidades. Además, en vez de atribuir directamente al mencionado Departamento la facultad de ordenar la clausura, otorgó a dicha repartición la titularidad para ocurrir ante el Juez de Policía Local, quien ostentará la atribución respectiva. En consecuencia, se suprime la mención del auxilio de la fuerza pública, pues el imperio de las resoluciones judiciales lo lleva aparejado. La infracción podrá ser denunciada, además, por cualquiera persona.

El texto del Senado, por su parte, mantuvo la facultad en el ámbito del Juez de Policía Local, pero eliminó, de entre quienes pueden denunciar, al Departamento de Cooperativas. La

Cámara de origen no concordó con este criterio y rechazó la modificación.

La Comisión Mixta se inclinó unánimemente por la fórmula de la Cámara de Diputados, porque no encontró motivo suficiente para excluir al Departamento de Cooperativas de la posibilidad de denunciar el uso indebido de la denominación que distingue a este tipo especial de asociaciones.

El acuerdo contó con los votos favorables de los HH. Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, y de los HH. Diputados señores Encina, Hidalgo y Jaramillo.

Número 71

El **artículo 68** de la Ley General de Cooperativas abre el Título I del Capítulo II, que versa sobre las cooperativas de trabajo. El dispone que sólo las personas naturales podrán ser socias de dichas cooperativas; que su aporte deberá consistir necesariamente en trabajo, sin perjuicio de las inversiones que efectúen, y que para constituirse requieren un mínimo de cinco socios.

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, sustituye el precepto. El nuevo texto comienza por definir el objeto de tales cooperativas, indicando que él deberá consistir en producción o transformación de bienes y/o en la prestación de servicios a terceros, mediante el trabajo mancomunado de los socios, quienes serán remunerados en proporción a la labor realizada. Seguidamente, precisa que los aportes diferentes al trabajo podrán consistir en dinero o bienes muebles o inmuebles; estos últimos no gozarán de la franquicia del 50% del impuesto territorial, tasas y demás gravámenes establecidos en favor del Fisco, que contiene la letra a) del artículo 54 de la Ley General de Cooperativas.

El Senado enmendó formalmente el inciso primero del artículo de reemplazo, en el sentido de sustituir la expresión “y/o” por la conjunción disyuntiva “o”, lo cual fue rechazado por la Cámara de origen.

A juicio de la Comisión Mixta resulta formalmente preferible el criterio de la cámara revisora, por lo que os recomienda aprobar la corrección mencionada.

El acuerdo fue adoptado con los votos favorables de los HH. Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, y de los HH. Diputados señores Encina, Hidalgo y Jaramillo.

Número 92

Se refiere al **artículo 88** de la Ley General de Cooperativas, que impide a una determinada calidad de socios de las cooperativas campesinas gozar de los servicios y beneficios que ellas otorgan: se trata de las personas naturales o jurídicas que sean dueñas o arrendatarias de predios en que la cooperativa desarrolle actividades. Los aportes de estos socios no pueden exceder el 30% del capital; ellos tienen derecho a participar en el reparto de intereses y a la devolución de acciones y cuotas de ahorro, sea al momento de retirarse o al liquidarse la entidad.

La Cámara de Diputados aprobó un artículo que lo sustituye. Se precisa, en el nuevo texto, que sólo pueden ser socios de cooperativas campesinas los productores agrícolas que exploten personalmente una pequeña propiedad rústica, los miembros de comunidades campesinas e indígenas, los medieros y los trabajadores agrícolas, aún los de temporada; además, pueden serlo las personas jurídicas de derecho público y las de derecho privado sin fines de lucro, así como las personas naturales o jurídicas, que sean propietarias, arrendatarias o usufructuarias de predios en que estas cooperativas desarrollen sus actividades.

El Senado, por su parte, cambió el artículo en cuestión por uno en que la alusión a los productores agrícolas que exploten una pequeña propiedad rústica, a los miembros de comunidades campesinas e indígenas, a los medieros y a los trabajadores agrícolas, es reemplazada por otra, que hace referencia a los pequeños productores agrícolas y al artículo 13 de la ley N° 18.910. Este último precepto define las expresiones “pequeño productor agrícola”¹, “campesino”² y “hectárea de riego básico”. En el inciso segundo, la Cámara revisora amplió el objeto de las cooperativas campesinas al desarrollo de actividades artesanales y de conservación de recursos naturales renovables.

¹ Es aquel que explota una superficie no superior a las 12 Hectáreas de Riego Básico, cuyos activos no superen el equivalente a 3.500 Unidades de Fomento, que su ingreso provenga principalmente de la explotación agrícola, y que trabaje directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia.

² La persona que habita y trabaja habitualmente en el campo, cuyos ingresos provengan fundamentalmente de la actividad silvoagropecuaria realizada en forma personal, cualquiera que sea la calidad jurídica en que la realice, siempre que sus condiciones económicas no sean superiores a las de un pequeño productor agrícola, y las personas que integran su familia.

El reemplazo fue rechazado por la Cámara de Diputados.

La referencia a la ley N° 18.910, orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), asegura una siempre deseable coherencia de la legislación aplicable a un sector de actividad y aprovecha la precisión de los conceptos definidos por dicho cuerpo legal.

Algunos miembros de la Comisión Mixta expresaron su inquietud porque los parámetros legales pudieran imponer un límite de acceso a las comunidades agrícolas. Puntualizaron que no existe discrepancia de fondo en esta materia, sino preocupación porque la normativa se haga cargo de la pequeña economía campesina en su integridad. A este respecto, se tuvo en consideración que, si bien dichas comunidades pueden poseer considerables extensiones, el criterio para medirlas es su equivalencia en hectáreas de riego básico, lo que hace más remota la probabilidad de que ellas queden excluidas de integrar cooperativas campesinas. En todo caso, a cada uno de los comuneros, individualmente considerado, le calza la definición de campesino, por lo que por esa vía también tienen asegurada la opción. Por último, si no les fuera posible integrarse a una cooperativa campesina, les queda abierta la posibilidad de hacerlo a una agrícola.

Se analizó también la idea, contenida en el inciso segundo del texto del Senado, de abrir a las cooperativas campesinas la posibilidad de abarcar otro giros, anexos o accesorios a la actividad silvoagropecuaria, tales como las artesanías, la conservación del medio ambiente y el agroturismo. En definitiva, teniendo presente que una de las líneas medulares del proyecto es permitir la existencia de cooperativas de objetivo combinado y otras de objetivo específico, se decidió no alterarla, y se desechó la idea de permitir la ampliación del giro de las cooperativas especializadas o de giro único.

En vista de los motivos resumidos, la Comisión Mixta se inclinó por la aprobación del primer inciso del artículo 88 propuesto por el Senado en el segundo trámite constitucional.

Se acordó dejar constancia de que la eliminación del segundo inciso, que consultaba el referido precepto del Senado, no significa impedir a cualquiera cooperativa, que no tenga por expresa disposición de la ley un objetivo único, darse por estatutos

unos objetivos combinados, de conformidad con el artículo 7º, lo cual hace innecesario el inciso descartado.

Ambos acuerdos, que fueron unánimes, se adoptaron con los votos emitidos por los HH. Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, y de los HH. Diputados señores Encina, Hidalgo y Jaramillo.

Número 96

El **artículo 92** de la Ley General de Cooperativas define a las cooperativas de servicio como aquellas que tienen por objeto satisfacer necesidades de sus socios, siempre que sus actos no signifiquen el ejercicio de un comercio. Por vía ejemplar no taxativa menciona a las escolares, de abastecimiento de energía eléctrica, de vivienda, de seguros, de aprovisionamiento, de ahorros y de beneficio para el hogar y la comunidad. Dispone que los excedentes producidos en operaciones con terceros incrementen la reserva legal y limita la posibilidad de contratar seguros de las cooperativas en general, lo que podrán hacer únicamente con instituciones aseguradoras estatales o con cooperativas de seguro.

El artículo sustitutivo aprobado por la Cámara de Diputados suprime las referidas limitaciones y redefine estas cooperativas como aquellas que tienen por objeto distribuir bienes y proporcionar servicios, preferentemente a sus socios, con el propósito de mejorar las condiciones ambientales de estos últimos y de satisfacer sus necesidades familiares, sociales, ocupacionales o culturales. La enmienda del Senado, rechazada por la Cámara de origen, consistió en eliminar de esta definición a las cooperativas de seguros.

El D.F.L. N° 251, del Ministerio de Hacienda, de 1931, sobre Sociedades Anónimas, Compañías de Seguros y Bolsas de Comercio, dispuso, en su artículo 4º, que el comercio de seguros sólo podrá hacerse en Chile por sociedades anónimas nacionales de seguros.

La ley N° 17.308, en su artículo 3º, autorizó también a participar en dicho comercio a las entidades mutuales sin fines de lucro, a las cooperativas de seguros y a otras entidades que fueran expresamente autorizadas para ello por una ley.

El número 4 del artículo Primero de la ley N° 18.660, publicada en octubre de 1987, dispuso que el comercio de

asegurar y reasegurar en Chile sólo podrá hacerse por sociedades anónimas nacionales de giro exclusivo.

En consecuencia, la supresión de la referencia a cooperativas de seguros en el artículo 92 de la Ley General de Cooperativas, que hace el Senado, no es más que una concordancia con lo ya obrado por el legislador en materia de seguros, por lo que la Comisión Mixta la aprobó por unanimidad.

Concurrieron al acuerdo con su voto los HH. Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, y los HH. Diputados señores Encina, Hidalgo y Jaramillo.

Número 116

Sustituye el **artículo 110** de la Ley General de Cooperativas, el cual dispone que las menciones del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que se hace en diversos preceptos de esa Ley deben entenderse referidas al organismo que reemplace a la ex Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano.

El número 116 en comento, del artículo 1º del proyecto aprobado en el primer trámite constitucional, versa acerca de una materia enteramente diferente: él prescribe que el remanente que obtengan las cooperativas cerradas de vivienda no podrá destinarse a formar fondos de reserva, y que el excedente se capitalizará íntegramente, aumentando proporcionalmente las cuotas de capital. Ello obedece a que el artículo 110 vigente ya cumplió su cometido.

El texto del Senado para el referido artículo 110 de la Ley General de Cooperativas, propuesto como número 109 del artículo 1º del proyecto, se ocupa, a su vez, de una materia distinta: determina que las cooperativas cerradas no se disuelven ni liquidan por la asignación de todas las viviendas construidas, si dentro de su objeto también se incluyen el equipamiento y el desarrollo comunitario. Este reemplazo fue rechazado por la Cámara de Diputados.

La Comisión Mixta tuvo en vista que en el texto aprobado por ella para sustituir el artículo 36 de la Ley General se establece un criterio general para la destinación y reparto de remanentes y excedentes que es válido también para las cooperativas cerradas de vivienda. Los llamados a decidir cómo capitalizar o distribuir tales recursos son los propios socios. Además, de esa manera se evitan las tensiones que pueden generarse entre los socios y los administradores una vez edificadas y entregadas las

viviendas, ya que la propensión más probable de estos últimos será capitalizar, para asegurar su permanencia y estabilidad en tales funciones.

Por otro lado, el artículo que propone el Senado deja abierta la posibilidad de que la cooperativa cerrada de vivienda que ha cumplido su objetivo principal siga vigente, si como metas accesorias o anexas contempla el equipamiento y el desarrollo comunitarios.

Por tales motivos la Comisión Mixta, en forma unánime, optó por proponeros el artículo aprobado por el Senado. Se pronunciaron en tal sentido los HH. Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, y los HH. Diputados señores Encina, Hidalgo y Jaramillo.

Número 129

Incide en el **artículo 120** de la Ley General de Cooperativas, que prohíbe la participación de comerciantes o intermediarios, directa o indirectamente, en los beneficios que tienen las cooperativas de consumo. El segundo inciso prohíbe a dichas entidades emitir giros u órdenes de compra a favor de los socios y en interés del comercio privado.

El proyecto de la Cámara de Diputados suprime el primer inciso, en tanto que el del Senado opta por derogar todo el artículo. Esta corrección fue rechazada por la Cámara de origen.

En su oportunidad, el Senado decidió suprimir también el inciso segundo, para mantener la correspondencia con los acuerdos previos, que habían desestimado autorizar los descuentos voluntarios por planillas, de las remuneraciones de trabajadores que fueran socios de cooperativas y a favor de éstas. Habiendo sido repuestos dichos descuentos, corresponde adoptar en este particular el criterio de la Cámara de Diputados, que fue lo que resolvió la Comisión Mixta.

El acuerdo unánime recibió los votos de los HH. Senadores señores García, Gazmuri, Novoa y Orpis, y los HH. Diputados señores Encina, Hidalgo y Jaramillo.

Número 150

El proyecto de la Cámara de Diputados, mediante este numeral, agrega a la Ley General de Cooperativas cinco **artículos nuevos**, a los que corresponderían los números 142 a 146.

El **artículo 142**, nuevo, señala quienes tendrán derecho a voz en las reuniones de los consejos de administración o directorios, y a examinar sus libros y antecedentes, de las cooperativas o sociedades en que participen como socios otras cooperativas, que detenten al menos un 30% del capital. Podrán hacerlo los miembros del consejo de administración, los de la junta de vigilancia, los inspectores de cuentas, el gerente, los socios administradores de las cooperativas que no están obligadas a tener un directorio y los liquidadores.

El **artículo 143**, nuevo, permite a las cooperativas extranjeras operar en Chile, siempre que observen los principios cooperativos y los requisitos legales, se ajusten a las leyes chilenas y no contraríen las buenas costumbres o el orden público, todo ello conforme al reglamento.

El **artículo 144**, nuevo, hace aplicables las disposiciones de los artículos 2º y 16 de la Ley General, a las cooperativas extranjeras de ahorro y crédito y de vivienda, lo que implica que deben presentar un estudio socioeconómico sobre las condiciones, posibilidades financieras y planes de trabajo, que el Departamento de Cooperativas puede rechazar o hacerle reparos.

El **artículo 145**, nuevo, faculta al Departamento de Cooperativas para prohibir que operen en el país cooperativas extranjeras que incurran en alguna de las causales de disolución que contempla la letra c) del artículo 50 de la Ley General. En el texto de la Cámara de Diputados este literal permitía la disolución mediante resolución administrativa; el Senado lo reemplazó por un mecanismo basado en sentencia judicial, que ya está aprobado porque a su respecto no ha habido discrepancia.

Finalmente, el **artículo 146**, nuevo, explicita que a las cooperativas extranjeras les serán aplicables las disposiciones especiales que regulan en nuestro país tipos también singulares de cooperativas.

El Senado no aceptó los nuevos artículos 142 a 146 propuestos por la Cámara de Diputados y consignó, como artículos 142 y 143, preceptos relativos a otras materias. La Cámara de Diputados rechazó todos esos acuerdos.

El Senado propuso un artículo 142 concerniente a agencias nacionales de cooperativas extranjeras, las cuales deberán constituirse conforme a la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas, y no gozarán de los beneficios tributarios que la ley otorga a las chilenas.

Como artículo 143 la Cámara revisora consultó un precepto que permite, con efecto retroactivo, sanear los vicios de nulidad en que se hubiera incurrido en la constitución o modificación de una cooperativa, de la misma forma que la ley N° 19.499 permite hacerlo respecto de sociedades, cuando se ha incurrido en defectos formales.

El Jefe del Departamento de Cooperativas, señor Carlos Rubio, informó que operan en Chile agencias de cooperativas extranjeras y que ellas no gozan de franquicias tributarias, de modo que el proyecto vendría a darle marco legal a lo que es actualmente una práctica consagrada.

La Comisión Mixta tuvo también en vista que es frecuente que cooperativas extranjeras operen en el rubro bancario y de los seguros; ellas no reúnen en Chile asociados que sean personas naturales para cumplir fines cooperativos, sino que actúan como empresas inversionistas.

Todo hace justificable exigirles, tal como a las sociedades extranjeras, que constituyan una agencia o representación en Chile, con estatutos y poderes escriturados, inscritos y publicados, para efectos de transparencia e información a los terceros que operarán con ellas.

En lo atinente al saneamiento de vicios de nulidad, se estimó razonable extender a las cooperativas el procedimiento ya vigente respecto de otros tipos de entidades asociativas, para no discriminar en contra de las cooperativas, manteniéndolas sujetas al antiguo y rígido sistema de nulidad absoluta insanable consagrado por el Código Civil.

Sin embargo, habiendo advertido la Comisión Mixta que el proyecto contiene normas específicas sobre nulidad en los artículos 15 y 15 bis, acordó modificar el artículo 143 propuesto por el Senado para que no quepa duda de su aplicabilidad.

Los artículos 142 y 143 que os proponemos fueron aprobados por unanimidad, por los HH. Senadores señores

García, Gazmuri, Lavandero, Novoa y Orpis, y los HH. Diputados señores Encina, Hidalgo y Jaramillo.

En mérito de lo expuesto, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros el siguiente acuerdo, a fin de resolver la discrepancia suscitada entre ambas ramas del Congreso Nacional, el que de conformidad con lo dispuesto por la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, debe ser objeto de una sola votación, sin quórum especial. En su formulación seguimos, en la medida de lo posible, el orden numérico del artículo 1° tal como quedó en el segundo trámite constitucional, incorporando numerales nuevos, o remitiéndonos a la numeración del texto de la Cámara de Diputados, cuando ello fue necesario:

PROYECTO DE ACUERDO:

(1) Aprobar como número 32 del artículo 1°, el siguiente:

“32.- Sustitúyese el artículo 36, por el siguiente:

“Artículo 36.- El saldo favorable del ejercicio económico, que se denominará remanente, se destinará a absorber las pérdidas acumuladas, si las hubiere. Hecho lo anterior, se destinará a la constitución e incremento de los fondos de reserva, en el caso que éstos sean obligatorios, o a la constitución e incremento de reservas voluntarias y al pago de intereses al capital, de conformidad con el estatuto. Por último, el saldo, si lo hubiere, se denominará excedente y se distribuirá en dinero entre los socios o dará lugar a una emisión liberada de cuotas de participación.

Los excedentes provenientes de operaciones de la cooperativa con los socios, se distribuirán a prorrata de éstas. Aquéllos provenientes de operaciones con terceros, se distribuirán a prorrata de las cuotas de participación.

Las cooperativas abiertas de vivienda y las de ahorro y crédito deberán constituir e incrementar cada año un fondo de reserva legal, con un porcentaje no inferior al 20% de sus remanentes. Cuando el fondo de reserva legal alcance un 50% del patrimonio, estas entidades estarán obligadas a distribuir entre los socios, a título de excedentes, al menos el 30% de los remanentes. El saldo podrá incrementar el fondo de reserva legal o destinarse a reservas voluntarias.

Las demás cooperativas podrán formar reservas voluntarias, pero ellas no podrán exceder del 15% del patrimonio.”.”. (7 x 0)

(2) Intercalar como número 55 del artículo 1º, el siguiente:

“55.- Agrégase el siguiente artículo 58, nuevo:

“Artículo 58.- Incrementase hasta el 25% el límite de descuentos voluntarios por planilla establecido en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo, cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de consumo o de ahorro y crédito de las que el trabajador sea socio, siempre que la suma de los descuentos del referido inciso segundo, y de los descuentos para vivienda autorizados por el inciso primero del mismo artículo 58 del Código mencionado, no exceda del 45% de la remuneración total del trabajador.”.”. (7 x 0)

(3) Incorporar como número 56 del artículo 1º, el siguiente:

“56.- Agrégase el siguiente artículo 59, nuevo:

“Artículo 59.- Los descuentos a favor de cooperativas señalados en el artículo precedente se deberán efectuar con el solo mérito de la autorización por escrito del socio de la cooperativa, la que deberá ser otorgada para cada operación, siempre que no se excedan los límites máximos allí fijados.

La persona natural o jurídica que haya efectuado los descuentos deberá entregárselos a la cooperativa respectiva, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a la fecha en que hayan debido pagarse las remuneraciones.”.”. (7 x 0)

(4) Reiterar el rechazo del número 62 del artículo 1º del proyecto aprobado en primer trámite constitucional. (7 x 0)

(5) Insertar como número 61 del artículo 1º, el siguiente:

“61.- En el artículo 65:

a) Sustitúyese la frase "La Dirección de Industria y Comercio podrá ordenar", por la siguiente: "El Departamento de

Cooperativas o cualquier persona podrá solicitar al Juzgado de Policía Local correspondiente al domicilio del infractor, que ordene".

b) Elimínase la frase final "para cuyo efecto contará con el auxilio de la fuerza pública", sustituyéndose la coma (,) que la antecede, por un punto (.) final.". (7 x 0)

(6) Reemplazar, en el inciso primero del artículo 68 a que se refiere el número 63 del artículo 1º, que pasa a ser número 65, la expresión "y/o" por la conjunción "o". (7 x 0)

(7) Suprimir el inciso segundo del artículo 88 propuesto en el número 84 del artículo 1º, que pasa a ser número 86. (7 x 0)

(8) Suprimir, en el inciso segundo del artículo 92 que es reemplazado en el número 96 del artículo 1º, que pasa a ser número 90, la expresión "de seguros". (7 x 0)

(9) Aprobar el artículo 110 propuesto en el número 109 del artículo 1º, que pasa a ser número 111. (7 x 0)

(10) Aprobar, como número 125 del artículo 1º, el contenido en el número 129 del proyecto aprobado en primer trámite constitucional, que es del tenor siguiente:

"125.- Elimínase el inciso primero del artículo 120, pasando el actual inciso segundo a ser inciso único.". (7 x 0)

(11) En el número 147 del artículo 1º, que pasa a ser número 149, incorporar los siguientes artículos 142 y 143:

"Artículo 142.- Las cooperativas extranjeras podrán constituir una agencia que opere en territorio nacional, de conformidad a las normas de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas, y quedarán sujetas a las normas de la presente ley en lo que sea pertinente, pero no gozarán de los beneficios tributarios que la ley chilena reconoce a las cooperativas.

Artículo 143.- Serán aplicables a los actos de constitución o de modificación de las cooperativas que se constituyan en el futuro o que se hayan constituido con anterioridad a esta ley, además de las disposiciones específicas que ella contiene sobre saneamiento de vicios de nulidad, las disposiciones de la ley N° 19.499. Para los efectos de dicha ley se entenderá por modificación de la cooperativa tanto la reforma de sus estatutos, como su fusión,

división, transformación o disolución, debiendo aplicarse a su respecto los procedimientos y normas establecidos para las sociedades anónimas.”. (8 x 0)

(12) Mantener la supresión de los artículos 144, 145 y 146 del artículo 1º del proyecto aprobado en primer trámite constitucional.(8 x 0)

(13) Rectificar la numeración interna del artículo 1º, conforme a los acuerdos anteriores.”. (8 x 0)

- - - - -

Si es aprobado el acuerdo que os proponemos, el proyecto queda como sigue:

PROYECTO DE LEY

"Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley General de Cooperativas, cuyo texto refundido se contiene en el decreto supremo N° 502, de 1 de setiembre de 1978, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:

1.- Reemplázase el artículo 1º por el siguiente:

"Artículo 1º.- Para los fines de la presente ley son cooperativas las asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda mutua tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes características fundamentales:

Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por persona y su ingreso y retiro es voluntario.

Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios, a prorrata de aquéllas.

Deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar actividades de educación cooperativa y procurar establecer entre ellas relaciones federativas e intercooperativas.”.

2.- Sustitúyese el artículo 2º, por el siguiente:

"Artículo 2º.- Las cooperativas pueden tener por objeto cualquier actividad y estarán sujetas a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en cuanto a las operaciones propias de su giro, las cooperativas se sujetarán, en lo que les sea aplicable, a la regulación y fiscalización establecida por leyes especiales que rijan a la actividad económica que constituya su objeto."

3.- Derógase el artículo 3º.

4.- Derógase el artículo 4º.

5.- Derógase el artículo 5º.

6.- Derógase el artículo 6º.

7.- Sustitúyese el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Las cooperativas, de acuerdo a sus estatutos, podrán combinar finalidades de diversas clases, salvo las que deban tener objeto único como las cooperativas de vivienda abiertas, las de ahorro y crédito y cualquier otra que establezca la ley."

8.- Reemplázase el artículo 8º, por el siguiente:

"Artículo 8º.- Las cooperativas podrán operar con terceros. Sin embargo, no podrán establecer con ellos combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstos directa o indirectamente de los beneficios tributarios o de otro orden que la presente ley otorga a estas entidades."

9.- Derógase el artículo 9º.

10.- Derógase el artículo 10º.

11.- Reemplázase el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Las cooperativas que se organicen con arreglo a la presente ley gozarán de personalidad jurídica.

La razón social deberá contener elementos indicativos de la naturaleza cooperativa de la institución, los cuales podrán omitirse en la sigla o denominación de fantasía que se adopte.

Ninguna cooperativa podrá adoptar una razón social idéntica a la de otra preexistente. La inclusión en la

razón social de una referencia a su objeto no será suficiente para determinar que no existe identidad en la misma."

12.- Sustitúyense los artículos 12 a 16 por los siguientes:

"Artículo 12.- El acta de la Junta General Constitutiva, que deberá ser reducida a escritura pública, deberá expresar el nombre, profesión o actividad, domicilio y cédula nacional de identidad de los socios que concurren a su constitución. Asimismo, deberá constar en ésta, la aprobación de los estatutos y el texto íntegro de éstos.

El estatuto deberá contener, con sujeción a esta ley y al reglamento, las siguientes menciones mínimas:

a) Razón social, domicilio y duración de la cooperativa. En el evento de no señalar duración, se entenderá que ésta es indefinida. Si no señala domicilio, se entenderá domiciliada en el lugar de otorgamiento del instrumento de su constitución;

b) El o los objetos específicos que perseguirá;

c) Capital inicial suscrito y pagado; forma y plazo en que será enterado, en su caso; número inicial de cuotas que deberán ser múltiplos de cien, en que se divide el capital y la indicación y valoración de todo aporte que no consista en dinero;

d) La forma en que la cooperativa financiará sus gastos de administración; el organismo interno que fijará los aportes; la constitución de reservas y la política de distribución de remanentes y excedentes; la información mínima obligatoria que se entregará periódicamente y al momento del ingreso de los socios a la cooperativa; las limitaciones al derecho de renuncia a la cooperativa y las modalidades relativas a la devolución de los aportes de capital efectuados por los socios;

e) Requisitos para poder ser admitido como socio; derechos y obligaciones, y causales de exclusión de los mismos;

f) Periodicidad y fecha de celebración y formalidades de convocatoria de las Juntas Generales de Socios, las que, en todo caso, deberán celebrarse a lo menos una vez al año dentro del cuatrimestre siguiente a la confección del balance;

g) Materias que serán objeto de Juntas Generales de Socios; determinación de los quórumos mínimos para sesionar y del número de votos necesarios para adoptar acuerdos, tanto de carácter general como los que requieran por su importancia de normas especiales, como aquellos a que se refiere el artículo 139 de esta ley;

h) Número de miembros del Consejo de Administración, plazo de duración de los consejeros en sus cargos, y si podrán o no ser reelegidos, si la renovación de los consejeros se hará por

parcialidades o en su totalidad; periodicidad de celebración y formalidades de convocatoria de las sesiones del Consejo; materias que serán objeto de sesiones ordinarias y extraordinarias; quórumos mínimos para sesionar y adoptar acuerdos de carácter general o sobre materias que por su importancia requieran de normas especiales, e

i) Las demás que establezca el Reglamento.

Artículo 13.- Un extracto de la escritura social, autorizado por el Notario respectivo, deberá inscribirse en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente al domicilio de la Cooperativa, y publicarse por una sola vez en el Diario Oficial.

Dicho extracto deberá expresar, a lo menos, la razón social, domicilio y duración de la cooperativa, la enunciación de su objeto, el número de los socios que concurrieron a su constitución, el capital suscrito y pagado, el nombre y domicilio del notario ante el cual se redujo a escritura pública el acta, y la fecha de la escritura.

La inscripción y publicación a que se refieren los incisos precedentes, deberán efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la reducción a escritura pública del Acta de la Junta General Constitutiva.

Artículo 14.- Las actas de las Juntas Generales de Socios en las que se acuerde una reforma del estatuto o la fusión, división, transformación o disolución de las cooperativas, y sus extractos, se regirán por lo dispuesto en los artículos precedentes.

En estos casos, en el extracto respectivo será necesario hacer referencia al contenido específico del acuerdo, además de expresar la razón social de la cooperativa, el nombre y domicilio del notario ante el cual se haya reducido a escritura pública el acta y la fecha de dicha escritura.

Artículo 15.- La cooperativa en cuya escritura de constitución se omita lo dispuesto en el inciso primero del artículo 12 o cualquiera de las menciones exigidas en las letras a), b) y c) del mismo artículo; o cuyo extracto haya sido inscrito o publicado tardíamente o no haya cumplido con el resto de las exigencias del artículo 13, es nula, sin perjuicio del saneamiento en conformidad a la ley.

Las reformas de estatutos y los acuerdos de fusión, división, transformación o disolución de las cooperativas, siempre que consten de escritura pública, de instrumento reducido a escritura pública o protocolizado, y cuyos respectivos extractos hayan sido oportunamente inscritos y publicados, adolecerán de la misma nulidad establecida en el inciso primero, si en éstos se omiten cualquiera de las menciones exigidas en el artículo 14 de esta ley. Sin embargo estas reformas y acuerdos producirán efectos frente a los socios y terceros mientras no haya sido declarada su nulidad.

La declaración de estas nulidades no producirá efecto retroactivo y será aplicable a las situaciones que ocurran a partir del momento en que quede ejecutoriada la resolución que la contenga; todo sin perjuicio del saneamiento que proceda en conformidad a la ley.

Se equiparará a la omisión, cualquiera disconformidad esencial que exista entre la escritura de constitución o de los acuerdos a que se refiere el inciso anterior y la respectiva inscripción o publicación de su extracto. Se entiende por disconformidad esencial aquella que induce a una errónea comprensión de la escritura extractada.

Declarada la nulidad de la cooperativa, ésta entrará en liquidación, subsistiendo la personalidad jurídica para tal efecto. La liquidación se efectuará conforme a lo dispuesto por el artículo 53 de esta ley.

Los otorgantes del pacto declarado nulo responderán solidariamente a los terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de la cooperativa. Asimismo los terceros que contraten con una cooperativa que no ha sido legalmente constituida, no podrán sustraerse en razón de la nulidad al cumplimiento de sus obligaciones.

La nulidad de la constitución de una cooperativa o de las reformas o acuerdos a que se refiere el artículo 14 de esta ley, derivada de omisiones que adolezca el extracto inscrito y publicado, o de disconformidades esenciales entre éste y la correspondiente escritura pública, o de defectos en la convocatoria o desarrollo de juntas de socios, no podrá ser invocada después de dos años contados desde la fecha del otorgamiento de la escritura respectiva. Esta prescripción correrá contra toda persona y no admitirá suspensión alguna. Vencido ese plazo, las disposiciones de la escritura prevalecerán sobre las del extracto.

Artículo 15 bis.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, la cooperativa que no conste por escritura pública, ni en instrumento reducido a escritura pública, o cuyo extracto no haya sido inscrito o publicado, es nula de pleno derecho y no podrá ser saneada.

La existencia de hecho, dará lugar a una comunidad entre sus miembros y las ganancias y pérdidas se repartirán y soportarán y la restitución de los aportes se efectuará entre ellos con arreglo a lo pactado. A falta de pacto regirá lo establecido en esta ley y su reglamento.

Los miembros de la comunidad responderán solidariamente a los terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de ésta y no podrán oponer a los terceros la falta de los instrumentos mencionados en el inciso primero. Los terceros podrán acreditar la existencia de hecho de la cooperativa por cualquiera de los medios probatorios que reconoce el Código de Comercio y la prueba será apreciada de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Las reformas de estatutos y los acuerdos de fusión, división, transformación o disolución de las cooperativas, que no consten por escritura pública, ni en instrumento reducido a escritura pública, o cuyos respectivos extractos no hayan sido inscritos o publicados, no producirán efectos ni frente a los socios ni frente a terceros, de pleno derecho, sin perjuicio de la acción por enriquecimiento sin causa que proceda. Todo lo anterior será sin perjuicio del saneamiento en conformidad a la ley y con las restricciones que ésta impone.

Artículo 16.- Los interesados en formar cooperativas de ahorro y crédito y abiertas de vivienda deberán someter a la aprobación del Departamento de Cooperativas un estudio socioeconómico sobre las condiciones, posibilidades financieras y planes de trabajo que se proponen desarrollar. En caso de rechazo podrá reclamarse ante el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción del oficio mediante el cual se haya rechazado el estudio socioeconómico. El Departamento de Cooperativas tendrá un plazo de 60 días para formular observaciones u objeciones al estudio socioeconómico; si no se formularan dentro de dicho plazo, el estudio se tendrá por aprobado.

La junta general constitutiva de las cooperativas mencionadas en el inciso precedente se deberá

celebrar con posterioridad a la aprobación del respectivo estudio socioeconómico.”.

13.- Reemplázase el artículo 17, por el siguiente:

"Artículo 17.- Salvo los casos especialmente previstos en esta ley, el número de socios de una cooperativa será ilimitado, a partir de un mínimo de diez.

Si el número de socios de una cooperativa se redujere a un número inferior al mínimo señalado en el inciso anterior, se le concederá un plazo de seis meses para completarlo. En caso de no lograrlo quedará disuelta por el solo ministerio de la ley, debiendo los directores o el gerente publicar el hecho de su disolución en el Diario Oficial, dentro de los sesenta días siguientes al vencimiento del plazo de seis meses antes referido y, además, subinscribir la disolución al margen de la inscripción en el Registro de Comercio respectivo, dentro del mismo plazo. Los directores o el gerente que no cumplan con esta obligación, serán solidariamente responsables de los perjuicios que causen a terceros en razón de la falta de la publicación o subinscripción.

Podrán ser socios de una cooperativa las personas naturales y las personas jurídicas de derecho público o privado.”.

14.- Derógase el artículo 18.

15.- Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Los socios de las cooperativas podrán pertenecer a dos o más entidades de igual finalidad, salvo que sus estatutos lo prohiban.

Siempre que sea compatible con la naturaleza del objeto de la cooperativa los estatutos autorizarán que los herederos del socio fallecido continúen como miembros de la cooperativa como comunidad indivisa, debiendo designar un procurador común que los represente.

La persona que sea socio de más de una cooperativa de igual finalidad, sólo podrá desempeñar cargos directivos en una de ellas.

Los estatutos de las cooperativas podrán prohibir que sus socios efectúen, dentro de la zona de

funcionamiento que señalan, operaciones de la misma índole de las que la respectiva cooperativa ejecute.".

16.- Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- La adquisición, el ejercicio y la pérdida de la calidad de socio y las prestaciones mutuas a que haya lugar por estas causas, se regirán por los estatutos conforme a las normas de la presente ley.

El reglamento que se dicte será, en esta materia, supletorio de las disposiciones estatutarias."

17.- Sustitúyese el artículo 21, por el siguiente:

"Artículo 21.- Las cooperativas podrán suspender transitoriamente el ingreso de socios, cuando sus recursos sean insuficientes para atenderlos.

No podrá limitarse el ingreso de socios por razones políticas, religiosas o sociales, sin perjuicio del derecho del consejo de administración de calificar el ingreso de socios."

18.- Sustitúyese el artículo 22, por el siguiente:

"Artículo 22.- Ningún socio podrá ser propietario de más de un 20% del capital de una cooperativa, salvo en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, en las que el máximo permitido será de un 10%."

19.- Sustitúyese el artículo 24, por el siguiente:

"Artículo 24.- La persona que haya perdido la calidad de socio por renuncia o exclusión y los herederos del socio fallecido tendrán derecho a la devolución del monto actualizado de sus cuotas de participación, con las modalidades establecidas en los estatutos.

La renuncia sólo podrá ser rechazada en los casos previstos en los estatutos o en otras normas aplicables a las cooperativas.

La adopción de alguno de los acuerdos señalados en las letras e), g), h), m) y n) del artículo 41 bis, y la modificación sustancial del objeto social, como por ejemplo aquella que implique la realización de nuevas actividades no relacionadas directa o indirectamente con el objeto original, concederá derecho al

socio disidente a retirarse de la cooperativa, la que no podrá rechazar la renuncia en ningún caso.

Se considerará socio disidente a aquél que en la respectiva junta se hubiere opuesto al acuerdo pertinente o que, no habiendo concurrido a la junta, manifieste su disidencia por escrito a la cooperativa, dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha en que se adoptó el acuerdo.

El socio disidente que se retire de la cooperativa tendrá derecho a que se le pague dentro del plazo de 90 días o en el plazo señalado en los estatutos, si fuere inferior, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de retiro, el valor de sus cuotas de participación.

El derecho a retiro deberá ser ejercido dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la junta general de socios haya adoptado el acuerdo que lo motiva, mediante comunicación escrita dirigida a la cooperativa en la que el socio deberá expresar claramente su voluntad de retirarse por estar en desacuerdo con la decisión de la junta respectiva. Dicha comunicación deberá enviarse por carta certificada o por intermedio de un notario público que así lo certifique. No se exigirá esta formalidad cuando el gerente o quien haga sus veces deje constancia escrita de la recepción de la comunicación referida.

El consejo de administración podrá convocar a una nueva junta general que deberá celebrarse a más tardar dentro de los treinta días siguientes contados desde el vencimiento del plazo para ejercer el derecho a retiro, a fin de que se reconsidere o ratifique los acuerdos que motivaron su ejercicio. Si en dicha junta se revocaren los mencionados acuerdos, caducará el referido derecho a retiro. Si se ratificaren dichos acuerdos, no se abrirá un nuevo plazo para ejercerlo."

20.- Reemplázase la denominación del Título IV del Capítulo I de la Ley de Cooperativas, por "Del capital y de los excedentes".

21.- Sustitúyese el artículo 25 por el siguiente:

"Artículo 25.- El capital de las cooperativas será variable e ilimitado, a partir del mínimo que fijen sus estatutos y se formará con las sumas que paguen los socios por la suscripción de sus cuotas de participación. Los estatutos fijarán el monto de aportes mínimos que deberán efectuar los socios para incorporarse o mantener su calidad de tales.

El patrimonio de estas entidades estará conformado por los aportes de capital efectuados por los socios, las reservas legales y voluntarias y los excedentes o pérdidas existentes al cierre del período contable.

La participación de los socios en el patrimonio se expresará en cuotas de participación, cuyo valor será el que resulte de la suma del valor de sus aportes de capital, más las reservas voluntarias y más o menos, según corresponda, el ajuste monetario señalado en el inciso tercero del artículo 30 de la presente ley y los excedentes o pérdidas existentes, dividido por el total de cuotas de participación emitidas al cierre del período.

El valor de las cuotas de participación se actualizará periódicamente en las oportunidades que indique la ley o lo establezca el respectivo fiscalizador.

En las cooperativas de vivienda y en las de ahorro y crédito, el capital inicial no podrá ser inferior al patrimonio mínimo que establezca la ley para cada una de ellas.

En las cooperativas abiertas de vivienda, no podrán considerarse como capital los recursos económicos que los socios aporten a las mismas con el objeto de pagar el todo o parte del precio del inmueble que adquieran a través de la cooperativa, cuando el socio que los aporte no esté incorporado a algún programa habitacional específico. Tampoco podrán considerarse como capital los recursos que las cooperativas de ahorro y crédito reciban de sus socios por un concepto distinto al de suscripción de cuotas de participación.

Si el socio no pagare oportunamente los aportes de capital suscritos por él, los saldos insolutos serán cobrados en la forma dispuesta en el artículo 34.

El capital inicial deberá pagarse dentro del plazo que determinen los Estatutos.

Los aumentos de capital deberán pagarse en la forma o en el plazo que acuerde la Junta General de Socios.

Una vez vencido el plazo señalado por los estatutos o acordado por el órgano competente, sin que se haya enterado el capital suscrito o el aumento del capital, según corresponda, éste quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada.”.

22.- Derógase el artículo 26.

23.- Sustitúyese el artículo 27 por el siguiente:

"Artículo 27.- La responsabilidad de los socios de las cooperativas estará limitada al monto de sus cuotas de participación."

24.- Derógase el artículo 28.

25.- En el artículo 29:

a) Sustitúyese en el inciso primero la palabra "acciones" por "cuotas de participación".

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

"Se prohíbe la creación de cuotas de participación de organización y privilegiadas."

c) Derógase su inciso tercero.

26.- Sustitúyese el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- Las cooperativas deberán practicar balance al 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de la presentación de estados financieros periódicos en las oportunidades que determinen sus estatutos o la respectiva institución fiscalizadora, cuando corresponda. El Consejo de Administración de las cooperativas de ahorro y crédito y de las abiertas de vivienda deberá, además, presentar una memoria razonada acerca de la situación de la cooperativa en el período.

Las cooperativas deberán corregir monetariamente sus activos y pasivos de conformidad con lo establecido en el artículo 17º del decreto ley N° 824, de 1974.

No obstante, el reglamento establecerá normas especiales que permitan ajustar periódicamente el valor de los activos y pasivos a los precios de mercado. Este valor se incluirá en una cuenta transitoria del patrimonio, denominada "Ajuste Monetario", que deberá ser distribuida proporcionalmente entre las cuentas del patrimonio, el primer día hábil siguiente al cierre del período contable en que se haya producido el ajuste."

27.- Sustitúyese el artículo 31 por el siguiente:

"Artículo 31.- La junta general de socios podrá autorizar la emisión de valores de oferta pública de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores."

28.- Derógase el artículo 32.

29.- Derógase el artículo 33.

30.- Reemplázase en el artículo 34 la palabra "acciones" por "cuotas de participación".

31.- Reemplázase el artículo 35 por el siguiente:

"Artículo 35.- Podrá aceptarse por el Consejo de la cooperativa la reducción o retiro parcial de los aportes hechos por los socios, sin que éstos pierdan la calidad de tales y de acuerdo con las normas que al efecto establezcan los estatutos."

"32.- Sustitúyese el artículo 36, por el siguiente:

"Artículo 36.- El saldo favorable del ejercicio económico, que se denominará remanente, se destinará a absorber las pérdidas acumuladas, si las hubiere. Hecho lo anterior, se destinará a la constitución e incremento de los fondos de reserva, en el caso que éstos sean obligatorios, o a la constitución e incremento de reservas voluntarias y al pago de intereses al capital, de conformidad con el estatuto. Por último, el saldo, si lo hubiere, se denominará excedente y se distribuirá en dinero entre los socios o dará lugar a una emisión liberada de cuotas de participación.

Los excedentes provenientes de operaciones de la cooperativa con los socios, se distribuirán a prorrata de éstas. Aquéllos provenientes de operaciones con terceros, se distribuirán a prorrata de las cuotas de participación.

Las cooperativas abiertas de vivienda y las de ahorro y crédito deberán constituir e incrementar cada año un fondo de reserva legal, con un porcentaje no inferior al 20% de sus remanentes. Cuando el fondo de reserva legal alcance un 50% del patrimonio, estas entidades estarán obligadas a distribuir entre los socios, a título de excedentes, al menos el 30% de los remanentes. El saldo podrá incrementar el fondo de reserva legal o destinarse a reservas voluntarias.

Las demás cooperativas podrán formar reservas voluntarias, pero ellas no podrán exceder del 15% del patrimonio.”.

33.- Intercálase, a continuación del artículo 36 el siguiente artículo 36 bis, nuevo:

“Artículo 36 bis.- Las cooperativas abiertas de vivienda y las de ahorro y crédito deberán tener invertido, a lo menos, el 10% de su patrimonio en activos e instrumentos de fácil liquidación que determine el Reglamento.

Este porcentaje podrá ser aumentado mediante norma de aplicación general por el organismo fiscalizador.”.

34.- Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

“Artículo 37.- En caso de liquidación de la cooperativa, una vez absorbidas las eventuales pérdidas, pagadas las deudas y reembolsado a cada socio el valor actualizado de sus cuotas de participación, las reservas legales y cualesquiera otros excedentes resultantes, se distribuirán entre los socios, a prorrata de sus cuotas de participación.

La porción del patrimonio que se haya originado en donaciones recibidas por la cooperativa, salvo en el caso señalado en el artículo 108, deberá destinarse al objeto que señalen los estatutos. A falta de mención expresa, corresponderá a la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción destinarlos a favor de una o más de las instituciones regidas por la presente ley.”.

35.- Derógase el artículo 40.

36.- Sustitúyese el artículo 41 por el siguiente:

“Artículo 41.- En las Juntas Generales, cada socio tendrá derecho a un voto, tanto en lo que se refiere a la elección de personas, cuanto en lo relativo a las proposiciones que se formulen.

Los poderes para asistir con derecho a voz y voto a ellas, deberán otorgarse por carta poder en la forma que señale el reglamento.

No podrán ser apoderados los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, el Gerente y los trabajadores de las Cooperativas.

Los apoderados deberán ser socios de la cooperativa, salvo que se trate del cónyuge o hijos del socio, o de administradores o trabajadores de éstos, en cuyo caso el poder que se otorgue deberá ser autorizado ante notario.

Ningún socio podrá representar a más de un 5% de los socios presentes o representados en una asamblea general.

Los estatutos de una cooperativa podrán disponer que la asistencia a la Junta sea personal y que no se acepte, en ningún caso, mandato para asistir a ellas.

No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando así lo establezcan los estatutos, las Juntas Generales de las Cooperativas de primer grado podrán constituirse por delegados, en los siguientes casos:

- a) Cuando la cooperativa actúe a través de establecimientos ubicados en diversos lugares del territorio nacional, y
- b) Cuando la cooperativa tenga más de dos mil socios.

Los delegados serán elegidos antes de la Junta General de Socios y permanecerán en sus cargos el tiempo que se señale en los estatutos, no pudiendo en caso alguno prolongarse su período más allá de un año.

Para ser delegado se requerirá ser socio de la cooperativa. Los delegados podrán ser reelegidos indefinidamente.”.

37.- Intercálase el siguiente artículo 41 bis:

“Artículo 41 bis.- Son materia de Junta General de Socios:

- a) El examen de la situación de la cooperativa y de los informes de las juntas de vigilancia y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la cooperativa.

- b) La distribución de los excedentes o remanentes de cada ejercicio.

- c) La elección o revocación de los miembros del consejo de administración, de los liquidadores y de la junta de vigilancia.

- d) La disolución de la cooperativa.
- e) La transformación, fusión o división de la cooperativa.
- f) La reforma de sus estatutos.
- g) La enajenación de un 50% o más de su activo, sea que incluya o no su pasivo; como asimismo la formulación o modificación de cualquier plan de negocios que contemple la enajenación de activos por un monto que supere el porcentaje antedicho. Para estos efectos se presume que constituyen una misma operación de enajenación, aquellas que se perfeccionen por medio de uno o más actos relativos a cualquier bien social, durante cualquier período de 12 meses consecutivos.
- h) El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, excepto si éstos fueren entidades filiales, en cuyo caso la aprobación del Consejo de Administración será suficiente. Son entidades filiales aquellas organizaciones en que una cooperativa controla directamente, o a través de otra persona natural o jurídica, más del 50% de su capital.
- i) La aprobación de aportes de bienes no consistentes en dinero y estimación de su valor.
- j) El cambio de domicilio social a una región distinta.
- k) La modificación del objeto social.
- l) La modificación de la forma de integración de los órganos de la cooperativa y de sus atribuciones.
- m) El aumento del capital social, en caso de que sea obligatorio que los socios concurren a su suscripción y pago de las cuotas de capital respectivas.
- n) La adquisición por parte de las cooperativas de la calidad de socias de sociedades colectivas y de socio gestor de sociedades en comandita y la celebración de cualquier contrato que genere la responsabilidad por obligaciones de terceros, salvo que ellos sean una entidad filial de la cooperativa.
- ñ) La fijación de remuneración, participación o asignaciones en dinero o especies que correspondan, en razón de sus cargos, a los miembros del consejo de administración, junta de vigilancia o cualquier otro comité de socios que se establezca en los estatutos.
- o) Las demás materias que por ley o por los estatutos correspondan a su conocimiento o a la competencia de las juntas generales de socios y, en general, cualquier materia que sea de interés social.

Requerirán la conformidad de los dos tercios de los socios presentes o representados en la junta general respectiva los acuerdos relativos a las materias de las letras d), e), g), h), i), j), k), l), m), y n), los que deberán ser tratados sólo en juntas generales especialmente citadas con tal objeto.

Los acuerdos relativos a las demás materias de conocimiento de la junta general se adoptarán por la mayoría simple de los socios presentes o representados en ella.

La citación a junta se efectuará por medio de un aviso de citación, que se publicará con una anticipación de no más de 15 días ni menos de 5 días de la fecha en que se realizará la junta, en un diario de circulación en la zona en que la cooperativa tenga operaciones, o bien, en un diario de circulación nacional. Deberá enviarse, además, una citación por correo a cada socio, al domicilio que éste haya registrado en la cooperativa, con una anticipación mínima de 15 días a la fecha de celebración de la junta, la que deberá contener una referencia a las materias a ser tratadas en ella y las demás menciones que señale el reglamento.

38.- Sustitúyese el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 42.- El consejo de administración, que será elegido por la junta general de socios, tiene a su cargo la administración superior de los negocios sociales y representa judicial y extrajudicialmente a la cooperativa para el cumplimiento del objeto social, sin perjuicio de la representación que compete al gerente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de esta ley.

Los estatutos podrán contemplar la existencia de consejeros suplentes.

Las cooperativas podrán contemplar en sus estatutos cláusulas que confieran a las personas jurídicas de derecho público o privado que participen en ellas el derecho a designar un determinado número de miembros del consejo de administración, pero en todo caso este privilegio se limitará a una minoría de los mismos.

Las cooperativas podrán contemplar en sus estatutos la participación de sus trabajadores en el consejo de administración. Los consejeros laborales gozarán del fuero establecido en el artículo 174 del Código del Trabajo, desde la fecha de su elección y hasta 6 meses después de haber cesado en el cargo, siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea de los trabajadores, por sanción aplicada por el tribunal competente en cuya virtud deba hacer abandono del mismo, o por término de la empresa.

A lo menos, el 60% de los integrantes titulares y suplentes del consejo de administración deberá ser elegido por los socios usuarios de la cooperativa.

El consejo de administración, con sujeción a las normas que señalen el Reglamento y los estatutos sociales, podrá delegar parte de sus facultades en el gerente o en uno o más consejeros o funcionarios de la cooperativa y podrá, asimismo, delegarlas en otras personas para fines especialmente determinados."

39.- Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"Artículo 43.- Los consejeros, los gerentes, los socios administradores a que se refiere el inciso primero del artículo 68 bis y los miembros del comité organizador y de la comisión liquidadora o el liquidador, según el caso, responderán hasta de la culpa leve en el ejercicio de sus funciones, y serán responsables solidariamente de los perjuicios que causen a la cooperativa por sus actuaciones dolosas o culposas.

La aprobación otorgada por la junta general a la memoria y balance que aquellos presenten, o a cualquier cuenta o información general no los libera de la responsabilidad que les corresponda por actos o negocios determinados; ni la aprobación específica de éstos los exonera de aquella responsabilidad, cuando se hubieren celebrado con culpa o dolo.

Las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Administración se transcribirán en un libro de actas por un medio idóneo que ofrezca seguridad de que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta, que será firmada por los consejeros que hubieran concurrido a la sesión.

Si alguno de ellos fallece o se imposibilita por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento.

Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, conforme a lo expresado en los incisos precedentes y desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere.

El consejero que desee salvar su responsabilidad personal deberá hacer constar en el acta su opinión y si estuviere imposibilitado para ello hará una declaración por escrito ante el Departamento de Cooperativas, dentro del plazo de 10 días de celebrada la sesión respectiva o de la fecha en que hubiere cesado la imposibilidad.

El consejero que estime que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes.”.

40.- Reemplázase el artículo 44, por el siguiente:

“Artículo 44.- Se presume la responsabilidad de las personas indicadas en el artículo 43, según corresponda, en los siguientes casos:

1. Si la cooperativa no llevare sus libros o registros;
2. Si se repartieren excedentes cuando ello no corresponda;
3. Si la cooperativa ocultare sus bienes, reconociere deudas supuestas o simulare enajenaciones, y
4. Si la cooperativa no diere cumplimiento a sus obligaciones legales, reglamentarias y estatutarias, y a las instrucciones de los organismos fiscalizadores correspondientes.”.

41.- En el 45:

a) Suprímese en el párrafo primero del inciso primero, la palabra "empleado".

b) Suprímense los incisos segundo, tercero y cuarto.

42.- Reemplázase el artículo 46 por el siguiente:

“Artículo 46.- La Junta General nombrará una Junta de Vigilancia que estará compuesta hasta por 5 miembros, pudiendo ser hasta 2 de ellos personas ajenas a la cooperativa, que cumplan los requisitos que establezca el reglamento. Dicha junta tendrá por objeto examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros y las demás atribuciones que se establezcan en los estatutos y en el reglamento.

No podrá la Junta de Vigilancia intervenir en los actos del Consejo de Administración y del Gerente. La Junta de Vigilancia, con autorización de la Junta General, podrá llevar a cabo todas o parte de sus funciones a través de una confederación, federación o instituto auxiliar de cooperativas que disponga de servicios de auditoría o de una firma privada de auditores.

En caso de que la mayoría de los miembros de la Junta de Vigilancia determine que la cooperativa ha actuado en contravención a las normas de esta ley, de su reglamento o de los estatutos, ésta deberá exigir la celebración en un plazo no mayor a 15 días, contado desde la fecha del acuerdo, de una junta general de socios, donde se informará de esta situación. La junta de socios deberá celebrarse dentro del plazo de 30 días, contado desde que se exija su celebración.”.

43.- Sustitúyese el artículo 47, por el siguiente:

“Artículo 47.- Para todos los efectos legales se estimará que las instituciones regidas por la presente ley no obtienen utilidades, salvo para los efectos de lo dispuesto en los artículos 46 al 52 del Código del Trabajo.”.

44.- Reemplázase el artículo 48 por el siguiente:

“Artículo 48.- La cooperativa deberá mantener en la sede principal y en sus sucursales y establecimientos, a disposición de los socios y de terceros, ejemplares actualizados de su estatuto firmados por el gerente, con indicación de la fecha y notaría en que se otorgó la escritura social y la de sus modificaciones, en su caso, y de los datos referentes a sus legalizaciones.

Cada cooperativa deberá llevar un registro público indicativo de sus Consejeros, Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Gerentes o Liquidadores en su caso y apoderados, con especificación de las fechas de iniciación y término de sus funciones. Las designaciones y anotaciones que consten en dicho registro harán plena fe en contra de la cooperativa, sea a favor de los socios o de terceros.

Los consejeros, administradores, el gerente o liquidadores en su caso, serán solidariamente responsables de los perjuicios que causen a los socios y terceros en razón de la falta de fidelidad o vigencia de los documentos mencionados en el inciso precedente. Lo anterior es sin perjuicio de las sanciones administrativas que además pueda aplicar el organismo fiscalizador respectivo, a las cooperativas sometidas a su control.”.

45.- Derógase el artículo 49.

46.- Reemplázase el artículo 50, por el siguiente:

"Artículo 50.- Las cooperativas se disuelven:

- a) Por el vencimiento del plazo de duración, si lo hubiere.
- b) Por acuerdo de la junta general.
- c) Por las demás causales contempladas en los estatutos.

Se disolverán, asimismo, por sentencia judicial ejecutoriada dictada conforme al procedimiento establecido en el Capítulo V de la presente ley a solicitud de los socios, del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía o del organismo fiscalizador respectivo, basada en alguna de las siguientes causales:

- 1) Incumplimiento reiterado de las normas que fijen o de las instrucciones que impartan el Departamento de Cooperativas o el organismo fiscalizador respectivo;
- 2) Contravención grave o inobservancia de la ley o de los estatutos sociales, y
- 3) Las demás que contemple la ley."

47.- Sustitúyese el artículo 51 por el siguiente:

"Artículo 51.- Cuando la disolución se produzca por alguna de las causales contempladas en las letras a) y c) del artículo precedente, el consejo de administración, dentro de los 30 días siguientes, consignará este hecho por escritura pública, cuyo extracto deberá inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el Diario Oficial.

Una vez que hayan transcurrido 60 días, a contar del vencimiento del término de duración de la entidad, sin que se haya dado cumplimiento a las formalidades establecidas en el inciso precedente, el gerente, cualquier miembro, titular o suplente, del consejo de administración, socio o tercero interesado podrá dar cumplimiento a ellas.

Sin perjuicio de lo anterior, sea cual fuere la causal de disolución de una cooperativa, ésta deberá ser notificada a los socios mediante carta certificada dirigida al domicilio que tuvieren registrado."

48.- Intercálase el siguiente artículo 51 bis:

"Artículo 51 bis.- Dos o más cooperativas podrán fusionarse.

La fusión consiste en la reunión de dos o más cooperativas en una sola que las sucede en todos sus derechos y obligaciones, y a la cual se incorporan la totalidad del patrimonio y socios de los entes fusionados.

Hay fusión por creación, cuando el activo y pasivo de dos o más cooperativas que se disuelven, se aportan a una nueva cooperativa que se constituye.

Hay fusión por incorporación, cuando una o más cooperativas que se disuelven son absorbidas por una cooperativa ya existente, la que adquiere todos sus activos y pasivos.

En estos casos, no procederá la liquidación de las cooperativas fusionadas o absorbidas.

En las juntas generales en que se acuerde la fusión deberán aprobarse los balances auditados de las cooperativas que se fusionan.

Ningún socio, a menos que consienta en ello, podrá perder su calidad de tal, con motivo de una fusión por creación o incorporación.

Aprobados en junta general los balances auditados y los informes periciales que procedieren de las cooperativas objeto de la fusión y los estatutos de la que se crea o de la absorbente, en su caso, el consejo de administración de ésta deberá distribuir directamente las nuevas cuotas de participación entre los socios de aquellas, en la proporción correspondiente.

Los excedentes generados por cada cooperativa en el ejercicio en que se realice la fusión pertenecerán a los socios de la cooperativa en que se produjeron y se distribuirán en conformidad a los estatutos de la respectiva cooperativa.”.

49.- Sustitúyese el artículo 52, por el siguiente:

"Artículo 52.- La división de las cooperativas y su transformación en otro tipo de sociedad, deberá ser acordada en junta general de socios citada especialmente con dicho objeto.

La división consiste en la distribución del patrimonio de la cooperativa entre sí y una o más cooperativas que

se constituyan al efecto, correspondiéndoles a los socios de la cooperativa dividida, la misma proporción en el capital de cada una de las nuevas cooperativas que aquellas que poseían en la cooperativa que se divide.

La transformación consiste en la modificación de los estatutos de una cooperativa, mediante la cual se la somete a un régimen jurídico aplicable a otro tipo de sociedad, subsistiendo su personalidad jurídica.

Antes de la adopción del acuerdo de división o de transformación, deberá someterse a consideración de la junta general de socios el balance de la entidad y los estados y demostraciones financieras que el reglamento determine, auditados por profesionales independientes designados por la junta general de socios.

Ningún socio, a menos que consienta en ello, podrá perder su calidad de tal, con motivo de una división o transformación de la cooperativa a la cual pertenece."

50.- Sustitúyese el artículo 53, por el siguiente:

"Artículo 53.- La liquidación de una cooperativa disuelta será realizada por una comisión de tres personas elegidas por la junta general de socios.

La liquidación se practicará conforme a las normas que acuerde la junta general de socios y a las normas que sobre la materia imparta el Reglamento y el organismo fiscalizador respectivo, aplicándose lo dispuesto en el artículo 413 del Código de Comercio."

51.- Intercálase el siguiente artículo 53 bis:

"Artículo 53 bis.- La cooperativa disuelta subsiste como persona jurídica para los efectos de su liquidación, quedando vigentes sus estatutos en lo que fuere pertinente. En este caso, deberá agregar a su razón social las palabras "en liquidación"."

52.- En el artículo 54:

- a) Sustitúyese en la letra b) los vocablos "decreto ley 619, de 1974,", por "decreto ley N° 3.475, de 1980".
- b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Las cooperativas de consumo y las de servicio deberán pagar todos los impuestos establecidos por las leyes respecto de las operaciones que efectúen con personas que no sean socios, debiendo consignar en sus declaraciones de impuestos las informaciones necesarias para aplicar esta disposición.”.

c) Sustitúyese en el inciso final, los vocablos "y sociedades" por "e institutos".

53.- Sustitúyese el artículo 55 por el siguiente:

“Artículo 55.- Los socios de las cooperativas no pagarán el impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta por el mayor valor de sus cuotas de participación.”.

54.- Sustitúyese el artículo 56, por el siguiente:

“Artículo 56.- El aumento del valor nominal de las cuotas de capital y cuotas de ahorro y la devolución de excedentes originados en operaciones con los socios estarán exentos de todo impuesto.”.

55.- Agrégase el siguiente artículo 58, nuevo:

“Artículo 58.- Increméntase hasta el 25% el límite de descuentos voluntarios por planilla establecido en el inciso segundo del artículo 58 del Código del Trabajo, cuando los descuentos adicionales sean a favor de cooperativas de consumo o de ahorro y crédito de las que el trabajador sea socio, siempre que la suma de los descuentos del referido inciso segundo, y de los descuentos para vivienda autorizados por el inciso primero del mismo artículo 58 del Código mencionado, no exceda del 45% de la remuneración total del trabajador.”.

56.- Agrégase el siguiente artículo 59, nuevo:

“Artículo 59.- Los descuentos a favor de cooperativas señalados en el artículo precedente se deberán efectuar con el solo mérito de la autorización por escrito del socio de la cooperativa, la que deberá ser otorgada para cada operación, siempre que no se excedan los límites máximos allí fijados.

La persona natural o jurídica que haya efectuado los descuentos deberá entregárselos a la cooperativa

respectiva, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a la fecha en que hayan debido pagarse las remuneraciones.".".

57.- Derógase el artículo 61.

58.- Derógase el artículo 62.

59.- Derógase el artículo 63.

60.- Elimínase la frase final del artículo 64, que dice:

"Lo dicho se entiende sin perjuicio de lo establecido en los artículos 134 y 135.".

61.- En el artículo 65:

a) Sustitúyese la frase "La Dirección de Industria y Comercio podrá ordenar", por la siguiente: "El Departamento de Cooperativas o cualquier persona podrá solicitar al Juzgado de Policía Local correspondiente al domicilio del infractor, que ordene".

b) Elimínase la frase final "para cuyo efecto contará con el auxilio de la fuerza pública", sustituyéndose la coma (,) que la antecede, por un punto (.) final.

62.- Sustitúyese el artículo 66 por el siguiente:

"Artículo 66.- Las personas que incurran o se encuentren en las inhabilidades establecidas para los directores de sociedades anónimas en los artículos 35 y 36 de la ley N° 18.046, en lo que les fueren aplicables, no podrán desempeñarse como consejeros, liquidadores, inspectores de cuentas, miembros de juntas de vigilancia ni gerentes de cooperativas.".

63.- Sustitúyese el artículo 67 por el siguiente:

"Artículo 67.- Los consejeros, gerentes, liquidadores, inspectores de cuentas, integrantes de la junta de vigilancia, de la comisión liquidadora y del comité organizador y los socios de las cooperativas con los cuales el gerente deba ejercer sus atribuciones en mérito de lo establecido en el artículo 68 bis, que incurran en infracciones a las leyes, al reglamento, a los estatutos y a las demás normas que rigen a las cooperativas, o en incumplimiento de las instrucciones que les imparta el Departamento de Cooperativas, podrán ser objeto de la aplicación por éste de una multa a beneficio fiscal, la que deberá ser cumplida solidariamente

por los infractores, hasta por un monto global por cooperativa equivalente a 25 unidades tributarias mensuales. Si se tratare de infracciones reiteradas de la misma naturaleza, la multa podrá alcanzar hasta un monto equivalente a 50 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las establecidas en otras leyes y de su disolución por aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 50 de esta ley, en su caso.”.

64.- Intercálase el siguiente artículo 67 bis:

“Artículo 67 bis.- Las resoluciones del Departamento de Cooperativas que apliquen multas tendrán mérito ejecutivo una vez vencido el plazo para impugnarlas o desde que quede a firme la sentencia que rechace el recurso de reclamación. El cobro de las multas corresponderá a la Tesorería General de la República.”.

65.- Sustitúyese el artículo 68 por el siguiente:

“Artículo 68.- Son cooperativas de trabajo las que tienen por objeto producir o transformar bienes o prestar servicios a terceros, mediante el trabajo mancomunado de sus socios y cuya retribución debe fijarse de acuerdo a la labor realizada por cada cual.

Los aportes de los socios personas naturales deberán consistir necesariamente en el trabajo que se obliguen a realizar, sin perjuicio de los aportes que hagan en dinero, bienes muebles o inmuebles.

Las cooperativas de trabajo deberán tener un mínimo de cinco socios.”.

66.- En el artículo 68 bis, elimínase su inciso segundo y sustitúyese el tercero por el siguiente:

“Las cooperativas señaladas en el inciso anterior tampoco estarán obligadas a designar una Junta de Vigilancia, en cuyo caso deberán designar un inspector de cuentas titular y un suplente, que tendrán las atribuciones que esta ley y su reglamento confieren a la Junta de Vigilancia.”.

67.- Derógase el artículo 69.

68.- Derógase el artículo 70.

69.- Derógase el artículo 71.

70.- Derógase el artículo 72.

71.- Derógase el artículo 73.

72.- Derógase el artículo 74.

73.- Sustitúyese el artículo 75 por el siguiente:

"Artículo 75.- Los socios trabajadores no tendrán derecho a percibir remuneración, sin perjuicio de que podrán percibir una suma equivalente a un ingreso mínimo mensual si trabajan durante la jornada ordinaria de trabajo o a la proporción correspondiente en caso contrario. Dichas sumas serán consideradas gastos del ejercicio en que hayan sido devengadas y los socios no estarán obligados a devolverlas en caso alguno.

El excedente se distribuirá entre los socios en proporción al trabajo realizado por cada uno de ellos, según las normas generales que fije el respectivo estatuto. Los socios podrán hacer retiros anticipados durante el ejercicio con cargo a los excedentes del mismo. El monto máximo de dichos retiros será determinado por el consejo de administración. Estos retiros no podrán ser superiores a la suma de los excedentes devengados en el curso del ejercicio, más los saldos no distribuidos en los ejercicios anteriores.

Las sumas retiradas en exceso deberán ser cubiertas por los socios, sin perjuicio de la responsabilidad de los miembros del consejo que hubieren adoptado el acuerdo respectivo y del gerente que no haya manifestado su opinión en contrario.

El Departamento de Cooperativas tendrá la facultad de dictar normas que regulen el tratamiento de los anticipos retirados en exceso, en el evento que éstos no sean reintegrados en el ejercicio siguiente a aquél en que se pagaron."

74.- Derógase el artículo 76.

75.- Sustitúyese el artículo 77, por el siguiente:

"Artículo 77.- El ingreso, retiro o exclusión de los socios, las prestaciones mutuas a que haya lugar y, en general, las relaciones entre los socios y las cooperativas de trabajo, no se regirán por las normas del Código del Trabajo sino por las contenidas en esta ley, el estatuto, el reglamento interno de la cooperativa y el reglamento de la presente ley.

Sin embargo, serán aplicables a los socios personas naturales y a las cooperativas, según corresponda, los artículos 14, 15, 17 y 158, y los Títulos I, II y III del Libro II del Código del Trabajo.

Los estatutos deberán regular la forma de determinar la naturaleza de los servicios que deberán prestar los socios personas naturales, el lugar o ciudad en que hayan de prestarse, la duración y distribución de la jornada de trabajo, el trabajo en horas extraordinarias, el descanso dentro de la jornada, el descanso semanal, el feriado anual y las prestaciones a que tenga derecho el socio que se retire o sea excluido.

Los conflictos que se susciten en relación con las materias tratadas en este artículo y las prestaciones a que dieren lugar, serán de conocimiento de los juzgados de letras del trabajo del domicilio de la cooperativa, conforme al procedimiento establecido en el Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo.”.

76.- Derógase el artículo 78.

77.- Derógase el artículo 79.

78.- En el artículo 80:

a) Intercálase, después de las palabras “Ley de”, los vocablos “Impuesto a”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

“Sólo para los efectos previsionales, las cooperativas de trabajo serán consideradas empleadoras y los socios que trabajen en ellas trabajadores dependientes de las mismas, quienes accederán a todos los beneficios que la legislación establece para estos, tales como el subsidio por cargas familiares y el seguro por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.”.

c) Agrégase el siguiente inciso tercero:

“En tal carácter, la cooperativa hará la retención de las sumas que corresponda descontar por imposiciones previsionales y las enterará ante la institución previsional respectiva, conjuntamente con aquellos aportes previsionales que corresponden a su condición de empleadora. Sólo las sumas percibidas efectivamente por los socios con cargo al excedente, en conformidad

al reglamento interno, serán consideradas remuneraciones para estos efectos. Los excedentes que sean capitalizados por los socios no estarán afectos a los descuentos previsionales.”.

79.- Reemplázase el artículo 81, por el siguiente:

"Artículo 81.- Son cooperativas agrícolas y campesinas las que se dedican a la compraventa, distribución, producción y transformación de bienes, productos y servicios, relacionados con la actividad silvoagropecuaria y agroindustrial, con el objeto de procurar un mayor rendimiento de ella y que actúan preferentemente en un medio rural y propenden al desarrollo social, económico y cultural de sus socios.”.

80.- Reemplázase el artículo 82, por el siguiente:

"Artículo 82.- Son cooperativas pesqueras aquellas que se dedican a la producción, compra, venta, distribución, transformación de bienes, productos y servicios relacionados con la explotación de productos del mar y a las actividades que persigan el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes las desempeñan.

Las cooperativas pesqueras formadas por pescadores artesanales, tendrán acceso a todos los beneficios que señala la Ley General de Pesca y Acuicultura, para las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas.”.

81.- Derógase el artículo 83.

82.- Derógase el artículo 84.

83.- Derógase el artículo 85.

84.- Derógase el artículo 86.

85.- Derógase el artículo 87.

86.- Sustitúyese el artículo 88 por el siguiente:

“Artículo 88.- Sólo podrán pertenecer a las cooperativas campesinas los pequeños productores agrícolas y los campesinos definidos en el artículo 13º de la ley N° 18.910. Podrán además ser socios de estas cooperativas las personas de derecho público y de derecho privado que no persigan fines de lucro y las personas naturales o jurídicas que sean propietarias, usufructuarias,

arrendatarias o tenedoras a cualquier título de los predios en que dichas cooperativas desarrollen sus actividades.

87.- Derógase el artículo 89.

88.- Derógase el artículo 90.

89.- Derógase el artículo 91.

90.- Reemplázase el artículo 92, por el siguiente:

"Artículo 92.- Son cooperativas de servicio las que tengan por objeto distribuir los bienes y proporcionar servicios de toda índole, preferentemente a sus socios, con el propósito de mejorar sus condiciones ambientales y económicas y de satisfacer sus necesidades familiares, sociales, ocupacionales o culturales.

Sin que la enumeración siguiente sea taxativa, las cooperativas de esta clase podrán tener el carácter de escolares, de abastecimiento y distribución de energía eléctrica y de agua potable, de vivienda, de aprovisionamiento, de ahorro y crédito y también de beneficio para las actividades del hogar y de la comunidad."

91.- Intercálase, después del artículo 92, el subtítulo siguiente, nuevo:

"1) De las Cooperativas Escolares".

92.- Reemplázase la primera parte del inciso primero del artículo 93, hasta el punto seguido (.), por lo siguiente:

"Artículo 93.- Son cooperativas escolares las que se constituyen en los establecimientos de educación básica, media, especial o superior, con el objeto de propender al mejoramiento de las escuelas en las cuales se fundan y de la comunidad en que éstas funcionan."

93.- En el artículo 94:

Reemplázase, en el inciso primero, la expresión "los socios" por "la comunidad educativa".

b) Suprímese su inciso segundo.

c) Sustitúyese en el inciso final las palabras "a las ventas y servicios" por "al valor agregado".

94.- Intercálase, después del artículo 95, el subtítulo siguiente, nuevo:

"2) De las Cooperativas de Abastecimiento y Distribución de Energía Eléctrica y de Agua Potable".

95.- Sustitúyese el artículo 96, por el siguiente:

"Artículo 96.- Son cooperativas de abastecimiento y distribución de energía eléctrica las cooperativas de servicio que se constituyan con el objeto de distribuir energía eléctrica.

En cuanto a las operaciones del giro, se aplicará a estas cooperativas las normas del D.F.L. N° 1, del Ministerio de Minería, de 1982, sin perjuicio de las disposiciones siguientes.

Las cooperativas no concesionarias de servicio público de distribución podrán distribuir energía eléctrica a sus socios incluso en zonas concesionadas a otras empresas, siempre y cuando dichos socios hayan ingresado a la cooperativa con anterioridad al otorgamiento de la concesión.

Las referidas cooperativas podrán usar bienes nacionales de uso público para el tendido de líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución de electricidad, previa obtención de los permisos correspondientes.

Las cooperativas concesionarias de servicio público de distribución podrán exigir a sus socios y a los usuarios que soliciten servicio, un aporte de financiamiento reembolsable para la extensión de las instalaciones existentes hasta el punto de empalme del peticionario, para la extensión de líneas subterráneas o para ampliación de potencia.

Los aportes financieros se reembolsarán por su valor inicial reajustado e intereses pactados, de conformidad con lo dispuesto a este respecto en el D.F.L. N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería.

No obstante, si el reembolso fuese efectuado en cuotas de participación de la propia cooperativa, ésta

deberá liquidarlas y pagarlo en dinero dentro del plazo máximo de 5 años, contado desde la solicitud del socio en tal sentido, al valor que dichas cuotas tuviesen al momento de la referida solicitud.

La elección de la forma de reembolso se efectuará de conformidad con las normas del D.F.L. N° 1, del Ministerio de Minería, del año 1982, pero el aportante podrá oponerse a ella de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 133 A de la presente ley, cuando estime que la forma de reembolso propuesta no constituya un reembolso real.

Las referidas cooperativas no podrán cobrar gastos por concepto de reembolso de los aportes.”.

96.- Reemplázase el artículo 97 por el siguiente:

“Artículo 97.- Las cooperativas de abastecimiento y distribución de agua potable se registrarán, en lo que fuere aplicable, por las disposiciones de las leyes especiales que regulan esta actividad.”.

97.- Intercálanse, después del artículo 97, los subtítulos siguientes:

“3) De las Cooperativas de Vivienda.

a) Disposiciones Generales”.

98.- Derógase el artículo 98.

99.- Sustitúyese el artículo 99 por el siguiente:

“Artículo 99.- Son cooperativas de vivienda aquellas que tienen por objeto satisfacer las necesidades habitacionales y comunitarias de sus socios y prestar los servicios inherentes a dicho objetivo.

Habrá dos clases de cooperativas de vivienda:

1) Las cooperativas cerradas de vivienda, que se organizan para desarrollar un proyecto habitacional, y

2) Las cooperativas abiertas de vivienda, que deben ser de objeto único y pueden desarrollar en forma permanente, simultánea o sucesiva diferentes programas habitacionales y tener carácter nacional o bien desarrollar una acción regional.”.

100.- Sustitúyese el artículo 100, por el siguiente:

"Artículo 100.- Los dueños de terrenos ubicados en una misma comuna, que persigan como objetivo la construcción, ampliación o terminación de sus viviendas, la finalización de la urbanización o el establecimiento de servicios comunitarios, podrán constituir cooperativas de servicios habitacionales, conservando la propiedad de sus terrenos. Estas entidades se regirán por las normas aplicables a las cooperativas cerradas de vivienda."

101.- Sustitúyese el artículo 101, por el siguiente:

"Artículo 101.- La enajenación de las cuotas de participación de las cooperativas de vivienda deberá ser previamente aprobada por el consejo de administración, debiendo efectuarse mediante instrumento privado autorizado ante notario, en el que deberá constar la fecha de la sesión del consejo que la haya aprobado.

El consejo de administración podrá rechazar la enajenación en los casos previstos en los estatutos.

No será aplicable el artículo 1796 del Código Civil a la compraventa de cuotas de participación entre cónyuges. Sin embargo, la enajenación será inoponible a los acreedores del cedente que tuvieren créditos anteriores a la cesión."

102.- Sustitúyese el artículo 102, por el siguiente:

"Artículo 102.- El consejo de administración de las cooperativas de vivienda, a petición de cualquier socio interesado, le adjudicará en dominio la vivienda construida que tenga asignada en uso y goce o que le corresponda, una vez que se haya cumplido con las exigencias de urbanización y que el socio haya caucionado sus obligaciones pendientes con la cooperativa, si las hubiere.

Sin embargo, las cooperativas podrán conservar la propiedad de sus viviendas cuando el acreedor hipotecario que otorgó los créditos para construirlas así lo exija, de lo que se dejará constancia expresa en la escritura de mutuo respectiva. La prohibición de adjudicar las viviendas deberá ser inscrita en el Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Una vez pagado el mutuo hipotecario los socios tendrán el derecho establecido en el inciso primero."

103.- Derógase el artículo 103.

104.- Sustitúyese el artículo 104 por el siguiente:

"Artículo 104.- Los pasivos exigibles de las cooperativas de vivienda con más de 1.000 socios y cuyo patrimonio sumado a los ahorros de los socios exceda las 100.000 unidades de fomento, no podrán ser superiores a tres veces la suma de estos más el valor de los subsidios habitacionales obtenidos por o para sus socios."

105.- Sustitúyese el artículo 105 por el siguiente:

"Artículo 105.- Una vez que se asigne en uso y goce las viviendas a los socios, si su edificación o la ejecución de las obras de urbanización, hubiere sido financiada con un mutuo hipotecario, deberá dividirse el préstamo y la garantía hipotecaria entre los diversos inmuebles asignado a cada socio, el que responderá por la cuota correspondiente a dicho inmueble. Para estos efectos, el consejo de administración de la cooperativa representará legalmente a sus socios.

Los socios pagarán directamente al acreedor hipotecario sus dividendos a menos que se haya pactado otra cosa.

En caso de atraso en el pago del dividendo y siempre que dicho atraso exceda de 60 días, podrá el acreedor perseguir judicialmente la responsabilidad del socio. La garantía hipotecaria sólo podrá hacerse efectiva sobre el inmueble asignado al socio respectivo, aun cuando no se haya otorgado la recepción definitiva de la urbanización."

106.- Derógase el artículo 106.

107.- Sustitúyese el artículo 107, por el siguiente:

"Artículo 107.- Los socios a quienes se haya asignado una vivienda, tendrán derecho al uso y goce personal de la misma o a su arriendo en casos calificados, de acuerdo con las condiciones que establezcan los estatutos y el reglamento.

Los asignatarios o sus herederos, con sus obligaciones pecuniarias al día respecto de las cooperativas, que estén en uso y goce de una vivienda y que dejen de tener la calidad de socios, no perderán sus derechos sobre la misma."

108.- Intercálase después del artículo 107 el subtítulo siguiente:

"b) De las Cooperativas Cerradas de Vivienda".

109.- Reemplázase el artículo 108, por el siguiente:

"Artículo 108.- Los terrenos adquiridos por las cooperativas de vivienda a título gratuito, se considerarán parte de su capital para los efectos de la adjudicación de viviendas a los socios."

110.- Sustitúyese el artículo 109, por el siguiente:

"Artículo 109.- Para la adquisición a título oneroso de terrenos por una cooperativa de vivienda se deberá contar con un informe técnico favorable relativo a la factibilidad del loteo y la urbanización, de la dirección de obras o la unidad que ejerza sus funciones, de la municipalidad correspondiente a la ubicación del inmueble.

El informe deberá ser emitido dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de presentación de la solicitud con los certificados que sean necesarios.

El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo podrá autorizar a los institutos a que se refiere el artículo 125, que emitan el informe técnico antes mencionado, siempre que se ciñan a las normas que el citado Ministerio les imparta.

El acto o contrato que se celebre sin el informe técnico favorable a que se refiere este artículo adolecerá de nulidad relativa.

Los notarios no autorizarán escrituras ni los conservadores procederán a inscribirlas si no se inserta en ellas el correspondiente informe."

111.- Sustitúyese el artículo 110, por el siguiente:

"Artículo 110.- Las cooperativas cerradas de vivienda no se disuelven ni liquidan por el hecho de haber asignado en dominio a sus socios la totalidad de las viviendas por ellas construidas, si su objeto contempla el equipamiento y desarrollo comunitario."

112.- Después del artículo 110 agrégase el subtítulo siguiente:

"c) De las Cooperativas Abiertas de Vivienda".

113.- Sustitúyese el artículo 111, por el siguiente:

“Artículo 111.- El patrimonio de las cooperativas abiertas de vivienda no podrá ser inferior al equivalente a 7.000 unidades de fomento y tendrán un número de, a lo menos, 300 socios.

Estas cooperativas sólo podrán financiar sus gastos de administración con comisiones contempladas en los estatutos y en el reglamento. Además, podrán financiar otros gastos ordinarios y extraordinarios con los recursos económicos y comisiones adicionales que los socios aporten en la forma que contemple el reglamento. Los excedentes provenientes de las comisiones incrementarán el patrimonio de la cooperativa, integrándose al fondo de reserva legal si éste no se hubiere completado.

Los socios deberán ser informados oportuna y detalladamente sobre el destino de sus comisiones y aportes extraordinarios.

El organismo fiscalizador respectivo deberá dictar las normas administrativas y contables necesarias para aplicar las disposiciones precedentes. Asimismo, establecerá el procedimiento de entrega de información a los socios respecto del funcionamiento de las asambleas de programas, los procedimientos para acordar el loteo y la construcción y financiamiento para la adquisición de las viviendas y respecto de los aportes, exenciones tributarias que beneficien a los socios o a la cooperativa y otras materias que se consideren necesarias, en conformidad al reglamento.

En todo caso, deberán contabilizar separadamente las operaciones, actos y transacciones de cada uno de los programas habitacionales, con el objeto de determinar, respecto de cada uno de ellos, sus respectivos derechos, obligaciones y resultados, sin perjuicio de los estados consolidados y demostraciones financieras necesarios para el uso interno y el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y requerimientos de los organismos fiscalizadores. Los costos directos y todos aquellos asociados específicamente a cada programa habitacional deberán ser financiados por los socios incorporados a los mismos.

En caso de que una cooperativa abierta de vivienda perdiera sus fondos de reserva, por cualquier causa, deberá abstenerse de aceptar el ingreso de nuevos socios, salvo cuando éstos se incorporen directamente a algún programa habitacional en desarrollo o el organismo fiscalizador las autorice. Éste sólo podrá autorizarlas cuando les apruebe un plan de actividades que asegure la estabilidad financiera de la entidad dentro de un plazo determinado.”.

114.- Agrégase el siguiente artículo 111 bis, nuevo:

"Artículo 111 bis.- Las cooperativas abiertas de vivienda deberán formar una asamblea por cada programa habitacional, al cual pertenecerán los socios personas naturales incorporados al mismo, debiendo asimismo constituirse una asamblea con todos los socios ahorrantes personas naturales que no estén inscritos en ningún programa. En el caso que los socios ahorrantes tengan su residencia en distintas regiones del país, podrá formarse más de una asamblea de éstos, según lo establezcan los estatutos, el reglamento o lo determine la junta general.

Cada programa habitacional deberá tener un número limitado de socios y durará hasta que se efectúe una liquidación completa del mismo, una vez transferido el dominio de las viviendas a los socios. No obstante, los socios podrán continuar con el programa habitacional y la asamblea respectiva después de la liquidación, cuando así lo hayan decidido al incorporarse al mismo.

Cada vez que se cite a una junta general de socios, deberá convocarse, con a lo menos 30 días de anticipación, a las asambleas a que se refiere el inciso primero para tratar las materias que serán consideradas en la junta y proceder a las elecciones que correspondan.

Cada asamblea deberá elegir un consejo, cuya composición y atribuciones se fijarán en los estatutos. La junta general de socios de estas cooperativas, se constituirá con los consejeros de cada asamblea, quienes actuarán en calidad de delegados y representarán a sus respectivas asambleas, de acuerdo al número de socios inscritos en ella.

Las cooperativas abiertas de vivienda de carácter nacional podrán contemplar en sus estatutos asambleas regionales, a las cuales deberán asistir los consejeros de programa. Sin perjuicio de las atribuciones que les confieran los estatutos y el

reglamento, les corresponderá elegir un consejo regional, cuyos miembros en ejercicio representarán a los socios inscritos en las asambleas de la región respectiva, de acuerdo a lo señalado precedentemente.

En todo caso, la adopción de acuerdos relativos a las materias señaladas en las letras d), e), f), g), h) e i) del artículo 41 bis deberá efectuarse en junta general de socios, convocada y constituida de acuerdo a las normas generales, en la cual no regirá respecto de los consejeros de asambleas de programas o regionales la limitación establecida en el inciso quinto del artículo 41 relativa al voto por poder.

La enajenación de los bienes raíces destinados, de acuerdo al plano respectivo, a ser usados en común por una Asamblea de Programa, como las áreas de esparcimiento, recreación, reunión o desarrollo cultural de los integrantes del programa habitacional de que se trate, así como la constitución de derechos reales distintos al de dominio, sólo podrá ser efectuada por el Consejo de Administración, con acuerdo de la respectiva Asamblea.

Las cooperativas abiertas de vivienda que tengan un máximo de 300 socios y las que tengan un solo programa habitacional, podrán celebrar sus juntas generales con la asistencia de sus socios, conforme a las normas generales.”.

115.- Intercálase después del artículo 111 bis el subtítulo siguiente, nuevo:

"4) De las Cooperativas de Ahorro y Crédito".

116.- Sustitúyese el artículo 112 por el siguiente:

“Artículo 112.- Se denominarán cooperativas de ahorro y crédito las cooperativas de servicio que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios, de conformidad con las siguientes disposiciones:

Las cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las siguientes operaciones:

- a) Recibir depósitos de sus socios y de terceros;
- b) Emitir bonos y otros valores de oferta pública;
- c) Contraer préstamos con instituciones financieras nacionales o extranjeras;

d) Adquirir, conservar y enajenar bonos de la deuda interna y cualquiera otra clase de documentos emitidos en serie representativos de obligaciones del Estado o de sus instituciones;

e) Conceder préstamos a sus socios y en general, celebrar con ellos operaciones de crédito de dinero, con o sin garantía, reajustables y no reajustables;

f) Descontar a sus socios, letras de cambio, pagarés y otros documentos que representen obligaciones de pago;

g) Otorgar préstamos a sus socios, que se encuentren amparados por garantía hipotecaria;

h) Emitir letras, órdenes de pago y giros contra sus propias oficinas o corresponsales;

i) Previa autorización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, conceder a sus socios, préstamos en moneda nacional, mediante la emisión de letras de crédito, de conformidad con lo dispuesto en el Título XIII del D.F.L. N° 3, de 1997, que contiene el texto refundido y sistematizado de la Ley General de Bancos;

j) Adquirir, ceder y transferir efectos de comercio;

k) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos;

l) Adquirir, conservar, edificar y enajenar los bienes raíces necesarios para su funcionamiento. Podrán dar en arrendamiento la parte de los inmuebles que no se encuentren utilizando;

m) Adquirir, conservar y enajenar los bienes corporales muebles necesarios para su servicio o para la mantención de sus inversiones;

n) Emitir y operar tarjetas de crédito, para sus socios;

o) Previa autorización del organismo fiscalizador respectivo y cumpliendo los requisitos generales que para el objeto específico ella establezca, podrán ser accionistas o tener participación en una sociedad o cooperativa de apoyo al giro, de conformidad al Párrafo 2, del Título IX del D.F.L. N° 3, de 1997, que contiene el texto refundido y sistematizado de la Ley General de Bancos;

p) Otorgar a sus clientes servicios financieros por cuenta de terceros, en la forma y condiciones que determine el órgano fiscalizador respectivo, y

q) Otras operaciones que autorice el Banco Central de Chile, conforme a sus facultades. Las operaciones antes señaladas sólo podrán ser ejecutadas bajo las condiciones, requisitos y modalidades que establezca el Banco Central de Chile, de conformidad a sus facultades.

Para la realización de las operaciones establecidas en las letras b), h), i), k) y n), las cooperativas de ahorro y crédito deberán contar con un patrimonio pagado igual o superior a 400.000 unidades de fomento y encontrarse sometidas a la

fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.”.

117.- Agrégase el siguiente artículo 112 bis:

"Artículo 112 bis.- Las cooperativas de ahorro y crédito cuyo patrimonio exceda las 400.000 unidades de fomento, quedarán sometidas a la fiscalización y control de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, respecto de las operaciones económicas que realicen en cumplimiento de su objeto.

Tales cooperativas deberán contar con las instalaciones, recursos humanos, tecnológicos, procedimientos y controles necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones y operaciones; su patrimonio no podrá ser inferior al 10% de sus activos ponderados por riesgo, ni inferior al 5% de sus activos totales y, en lo que sea compatible con su naturaleza, quedarán sujetas a las disposiciones de la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el Decreto con Fuerza de Ley N°3, de 1997. En especial se les aplicarán las normas de los Títulos I y XV, con exclusión de sus artículos 123, inciso quinto, y 132, inciso segundo, y sus administradores deberán cumplir los requisitos de integridad contemplados en la letra b) del artículo 28 de la referida Ley.

El resto de las cooperativas de ahorro y crédito deberá someterse a las normas sobre contabilidad, auditoría, publicidad y control que determine el Departamento de Cooperativas, en conformidad a sus facultades.”.

118.- Elimínase la frase final del artículo 113, que dice: “Podrán ser socios de éstas los menores adultos.”.

119.- Sustitúyese el artículo 114, por el siguiente:

“Artículo 114.- Su patrimonio no podrá ser inferior a 1.000 unidades de fomento.”.

120.- Sustitúyese el artículo 115, por el siguiente:

"Artículo 115.- Las cooperativas de ahorro y crédito, además de los órganos de administración que indica el artículo 38, deberán contar con un comité de crédito, cuyos miembros serán designados por el consejo de administración.

Estas cooperativas estarán obligadas a fijar su política general de créditos en un reglamento interno, que deberá estar aprobado por el consejo de administración, sin perjuicio de las normas e instrucciones que les imparta el organismo fiscalizador respectivo.”.

121.- Derógase el artículo 116.

122.- Derógase el artículo 117.

123.- Sustitúyese el artículo 118, por el siguiente:

"Artículo 118.- Son cooperativas de consumo las que tienen por objeto suministrar a los socios y sus familias artículos y mercaderías de uso personal o doméstico, con el objeto de mejorar sus condiciones económicas.

Las cooperativas de consumo deben constituirse con 100 socios, a lo menos.”.

124.- Derógase el artículo 119.

125.- Elimínase el inciso primero del artículo 120, pasando el actual inciso segundo a ser inciso único.”.

126.- Sustitúyese, en el artículo 121, el guarismo "6" por "118”.

127.- Sustitúyese la denominación del Capítulo III "De las Confederaciones, Uniones, Federaciones y Sociedades Auxiliares", por "De las Confederaciones, Federaciones e Institutos Auxiliares.”.

128.- En el artículo 122:

1. Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Las federaciones de cooperativas estarán constituidas por tres o más cooperativas, las confederaciones por tres o más federaciones y los institutos auxiliares por siete o más personas jurídicas de derecho público, cooperativas u otras personas jurídicas de derecho privado que no persiguen fines de lucro.”.

2. a) Sustitúyese en el inciso segundo el término "uniones" por "confederaciones”.

b) Intercálase en el inciso segundo, después de las palabras "público o", los términos "de derecho" y elimínase la frase "de acuerdo con su objeto".

129.- Sustitúyese el artículo 123, por el siguiente:

"Artículo 123.- Las federaciones, confederaciones e institutos auxiliares, serán considerados como cooperativas para todos los efectos legales y reglamentarios."

130.- Sustitúyese el artículo 124, por el siguiente:

"Artículo 124.- A las federaciones y confederaciones les corresponderá velar por los intereses y complementar y facilitar el cumplimiento de los objetivos de las cooperativas, cooperando con su labor y realizando cualesquiera actividad de producción de bienes o de prestación de servicios que se señale en sus estatutos, con dicho objeto."

131.- Sustitúyese el artículo 125, por el siguiente:

"Artículo 125.- Son institutos auxiliares aquellos destinados a proporcionar servicios de asesoría, técnicos, educacionales, económicos, operacionales, de auditoría y administrativos preferentemente a las cooperativas, federaciones, confederaciones, grupos precooperativos y a otros institutos auxiliares, pudiendo asimismo participar en la organización de industrias y servicio de cualquiera naturaleza, en beneficio de las cooperativas y de los socios de éstas.

Los excedentes de cada ejercicio se destinarán a incrementar un fondo de reserva legal, irrepartible durante la vigencia de la institución."

132.- Sustitúyese el artículo 126, por el siguiente:

"Artículo 126.- Las instituciones a que se refiere éste Capítulo podrán desempeñar cualesquiera servicios de auditoría y de inspección técnica, económica, operacional y administrativa, con respecto a las cooperativas, en aquellos casos en que éstas se lo soliciten o el organismo fiscalizador o los árbitros que, conociendo de los casos a que alude el artículo 133 A del Capítulo V de la presente ley se los encomienden.

El organismo fiscalizador o dichos árbitros podrán encomendar a estas entidades asistir, con el objeto de

informarles, a juntas generales, sesiones de consejos de administración, y en general realizar cualquier diligencia o actuación que estimen procedentes para una adecuada y pronta resolución de la controversia sometida a su conocimiento.

Para el logro de sus finalidades, estas instituciones podrán operar directamente o crear entidades en que pueden participar además personas jurídicas, que de acuerdo a sus estatutos no persigan fines de lucro."

133.- Sustitúyese el artículo 127, por el siguiente:

"Artículo 127.- Los estatutos de las federaciones, confederaciones e institutos auxiliares podrán establecer que las entidades cooperativas que sean socias de las mismas tendrán un número de votos en las juntas generales proporcional al número de sus afiliados, directos o indirectos, sin que ninguna de estas entidades pueda tener más de 3 ni menos de un voto."

134.- Sustitúyese el artículo 128, por el siguiente:

"Artículo 128.- Será aplicable a las entidades a que se refiere este título, que tengan diez socios o menos, lo dispuesto en el artículo 68 bis."

135.- Derógase el artículo 129.

136.- Derógase el artículo 130.

137.- Derógase el artículo 131.

138.- Sustitúyese el artículo 132, por el siguiente:

"Artículo 132.- El Departamento de Cooperativas tendrá a su cargo fomentar el sector cooperativo, mediante la promoción de programas destinados al desarrollo de la gestión y capacidad empresarial en las cooperativas; dictar normas que contribuyan al perfeccionamiento del funcionamiento de las cooperativas; llevar un registro de las cooperativas vigentes y la supervisión y fiscalización de las cooperativas señaladas en el presente Capítulo.

Le corresponderá asimismo elaborar estadísticas del sector y difundir la información de que disponga,

relativa al funcionamiento de las cooperativas, mediante los mecanismos que para tales efectos establezca.

Corresponderá especialmente al Departamento de Cooperativas desarrollar las siguientes funciones:

a) Interpretar administrativamente, mediante resoluciones de carácter general, la legislación especial que rige a las cooperativas, sus reglamentos y las demás normas que les sean aplicables, y absolver las consultas específicas que sobre estas materias le formulen las cooperativas o sus socios;

b) Asesorar a los organismos públicos relacionados con la materia, en relación al sistema cooperativo e informar, a requerimiento de las autoridades competentes, los proyectos de ley y otras normas que incidan sobre él;

c) Promover el desarrollo de programas y actividades orientados a perfeccionar la gestión empresarial en las cooperativas, su desarrollo organizacional y a obtener la plena incorporación de estas entidades al quehacer económico;

d) Dictar normas e impartir instrucciones de carácter contable y administrativo para perfeccionar el funcionamiento de las cooperativas, pudiendo establecer normas especiales de contabilidad para determinadas clases de cooperativas, atendidas las necesidades de su funcionamiento, el número de socios, el capital o el volumen de sus operaciones;

e) Dictar normas relativas a la confección y conservación de las actas, libros y documentos que el Departamento determine;

f) Impartir a las entidades de revisión o supervisores auxiliares, a las juntas de vigilancia y a los inspectores de cuentas, normas sobre el desarrollo de sus funciones y contenido de los dictámenes e informes que deban emitir;

g) Dictar las normas que deban observarse en las liquidaciones de las cooperativas e impartir instrucciones de carácter general a los miembros de sus comisiones liquidadoras o a sus liquidadores;

h) Instruir con normas de carácter general a los organizadores de cooperativas que no llegasen a constituirse legalmente, a fin de procurar la restitución de los aportes que hubiesen recibido por dicho concepto;

i) Requerir de las cooperativas que proporcionen, por las vías que el Departamento señale, suficiente y oportuna información a los socios y al público sobre su situación jurídica, económica, financiera y patrimonial, y

j) Las demás que esta u otras leyes establezcan.

139.- Intercálanse los siguientes artículos 132 bis, 132 bis A y 132 bis B:

“Artículo 132 bis.- Corresponderá al Departamento de Cooperativas la supervisión del cumplimiento de las leyes aplicables a las cooperativas y de sus normas reglamentarias y especialmente fiscalizar el funcionamiento societario, administrativo, contable y financiero de las cooperativas de importancia económica, con excepción de aquellas cuya fiscalización, sobre las mismas materias, se encuentre encomendada por la ley a otros organismos. Para los efectos de esta ley, se entenderá por cooperativas de importancia económica, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas abiertas de vivienda y además todas aquellas cuyos activos sean iguales o superiores a 50.000 unidades de fomento o que tengan más de 500 socios.

Respecto de las cooperativas sometidas a su fiscalización, el Departamento de Cooperativas podrá:

1.- Controlar las operaciones y vigilar la marcha de estas cooperativas, con plenas facultades de inspección y revisión, pudiendo al efecto revisar los libros de contabilidad y sociales y documentación en general; requerir informes y antecedentes a sus representantes y efectuar comprobaciones y verificaciones materiales de las cuentas, gastos e inversiones, y requerir, en su caso, que en sus actas se deje testimonio o se inserten, parcial o íntegramente, sus comunicaciones;

2.- Representar a las cooperativas sometidas a su fiscalización las infracciones a la legislación aplicable a las cooperativas, sus reglamentos, estatutos, instrucciones del Departamento y demás normas que les sean aplicables, ordenándoles su corrección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 respecto de las multas;

3.- Objetar, suspender o prohibir la ejecución de cualquier acuerdo de las juntas generales, consejo de administración, comisiones liquidadoras de las cooperativas sometidas a su fiscalización o de los socios administradores a que se refiere el artículo 68 bis, contrario a la ley, su reglamento, estatutos, instrucciones del Departamento y demás normas que les sean aplicables. Podrá también autorizar la ejecución de dichos acuerdos cuando adolecieren de vicios producidos por defectos formales y sean indispensables para el correcto funcionamiento de la cooperativa.

Las resoluciones sobre la materia deberán ser fundadas y puestas en conocimiento del consejo o de la comisión liquidadora mediante carta certificada. Estos deberán ponerlas en conocimiento de los socios y de los terceros afectados, si los hubiese, y

4.- Ejercer las demás atribuciones que ésta u otras leyes le confieran.

Artículo 132 bis A.- Para el mejor desempeño de sus funciones fiscalizadoras, el Departamento podrá encargar la revisión del funcionamiento administrativo, contable, financiero y societario de las cooperativas sometidas a su fiscalización a entidades revisoras o de supervisión auxiliar, de carácter privado. Estas entidades podrán ser empresas clasificadoras de riesgo, empresas auditoras especializadas, institutos auxiliares de cooperativas y federaciones o confederaciones de cooperativas.

El Departamento de Cooperativas establecerá un sistema de acreditación de tales entidades y tendrá a su cargo un Registro Especial en el que deberán inscribirse los interesados. Podrá eliminar del registro a estas entidades o no renovar su inscripción, cuando no cumplan sus funciones y los requisitos establecidos.

El Departamento determinará las facultades con que estas entidades podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; dictará las normas relativas al cumplimiento de éstas y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción fijará, mediante Decreto Supremo, los aranceles que las entidades de revisión podrán cobrar a las cooperativas por los informes que deban emitir y las actuaciones que estas realicen en cumplimiento de sus funciones y los valores que el Departamento podrá cobrar a los interesados por sus propias actuaciones.

Artículo 132 bis B.- Los funcionarios del Departamento de Cooperativas estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las cooperativas, siempre que tales documentos no tengan el carácter de públicos ni se trate de requerimientos de algún Poder del Estado.

Lo anterior no obstará a que el Jefe del Departamento de Cooperativas pueda difundir o hacer difundir por las personas y medios que determine, la información o documentos relativos a las cooperativas con el fin de velar por la fe pública o por el interés de los socios, pudiendo asimismo proporcionar antecedentes generales o particulares que permitan la confección de informes estadísticos, estudios e investigaciones sobre las cooperativas,

siempre que no se trate de antecedentes comerciales o de otra índole, que por su naturaleza tengan el carácter de reservados.

El personal del Departamento de Cooperativas no podrá prestar servicios profesionales a las cooperativas."

140.- Sustitúyese la denominación del CAPITULO V por la siguiente: "CAPITULO V Del Recurso de Legalidad y De la Resolución de Conflictos".

141.- Sustitúyese el artículo 133, por el siguiente:

"Artículo 133.- Las resoluciones o actos del Departamento de Cooperativas serán reclamables ante el juzgado de letras en lo civil del domicilio del requirente, dentro de los 30 días siguientes a la recepción o publicación de la resolución respectiva, según el caso, o a la realización del acto impugnado.

El tribunal resolverá breve y sumariamente, con audiencia del Departamento de Cooperativas, para lo cual deberán emplazarlo, a fin de que si lo estima pertinente evacue su informe dentro del plazo de 15 días más el aumento que corresponda de acuerdo a la tabla de emplazamiento para contestar demandas. Junto con su informe, deberá remitir al tribunal todos los antecedentes que obren en su poder y que estén relacionados con la materia reclamada.

El tribunal podrá disponer, de oficio o a petición de parte, que se practiquen aquellas diligencias que estime indispensables para la acertada resolución del reclamo.

La sentencia recaída en el reclamo será apelable; sin embargo, aquella que lo rechace será apelable en el solo efecto devolutivo. Tratándose de reclamaciones contra resoluciones en que se impongan multas, la sentencia será apelable en los efectos suspensivo y devolutivo."

142.- Intercálanse, a continuación del artículo 133, los siguientes artículos 133 A, 133 B, 133 C, 133 D, 133 E, 133 F y 133 G, nuevos:

"Artículo 133 A.- Las controversias que se susciten entre los socios en su calidad de tales; entre éstos y las cooperativas de las que formen o hayan formado parte; y, entre las cooperativas entre sí, con relación a la interpretación, aplicación, validez o cumplimiento de la presente ley, su reglamento o los

estatutos sociales, se resolverán por la justicia ordinaria con procedimiento de juicio sumario o mediante arbitraje, a elección del demandante. En este último caso, el arbitraje se sujetará a las normas que se establecen en los artículos siguientes.

Se resolverán bajo el mismo procedimiento, los conflictos jurídicos que surjan entre los oponentes a socios y los organizadores de cooperativas que no llegasen a constituirse legalmente, en especial respecto de la restitución de las sumas o aportes que hubiesen recibido; los relativos a la normalización de cooperativas que tengan un funcionamiento irregular; y los que se susciten con motivo de la designación de liquidadores y durante la liquidación misma de la cooperativa.

Artículo 133 B.- La Confederación General de Cooperativas de Chile CONFECOOP-CHILE LIMITADA u otros organismos de integración de cooperativas, llevarán Registros de Arbitros, conforme a las disposiciones del Reglamento que se dicte al efecto.

Artículo 133 C.- La designación del árbitro corresponderá a las partes de común acuerdo.

En caso que no hubiese avenimiento o consentimiento entre las partes respecto de la persona del árbitro, el nombramiento se hará por la justicia ordinaria, debiendo en tal caso recaer dicho nombramiento en un solo individuo de los registros citados, y diverso del primero propuesto por cada parte.

A falta de Registro de Árbitros en el domicilio de la cooperativa, el nombramiento se hará por la justicia ordinaria, en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil para el nombramiento de peritos.

Artículo 133 D.- Los árbitros serán nombrados en calidad de árbitros de derecho, a menos que las partes de común acuerdo los designen en otro carácter.

Artículo 133 E.- El árbitro tendrá la facultad de exigir a las partes la provisión de fondos que estime necesaria para el pago de las costas procesales que requiriese la tramitación del juicio, aún cuando ella no fuere demandante. Lo anterior es sin perjuicio de lo que en la sentencia se determine, en conformidad a las reglas generales.

Artículo 133 F.- Las controversias a que se refiere el presente Título, que sean sometidas al conocimiento de los Arbitros de Derecho, se tramitarán conforme al procedimiento sumario establecido en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 133 G.- Será competente para conocer de los asuntos a que se refiere este Capítulo el juez de letras en lo civil del lugar en que tenga su domicilio la cooperativa.”.

143.- Intercálase, a continuación del artículo 133 G, el siguiente epígrafe: “CAPITULO VI Disposiciones Varias”.

144.- Derógase el artículo 134.

145.- Derógase el artículo 135.

146.- Derógase el artículo 136.

147.- Sustituyese el artículo 137, por el siguiente:

"Artículo 137.- A las entidades cooperativas que tengan, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, el carácter de cooperativas especiales o agrícolas o de abastecimiento de energía eléctrica se les continuará aplicando el decreto ley N° 3.351, de 1980, sin perjuicio de la aplicación supletoria de esta ley.

Las cooperativas agrícolas o de abastecimiento de energía eléctrica, podrán transformarse en especiales, de las regidas por el decreto ley N° 3.351, de 1980.

Lo expuesto no obsta a que las referidas cooperativas reformen sus estatutos con el objeto de quedar íntegramente sometidas a la presente ley.”.

148.- Sustitúyese el artículo 138, por el siguiente:

"Artículo 138.- Deróganse las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

La Ley N° 5.588; el título V de la Ley N° 5.604; el decreto ley N° 1.320, de 1976; el decreto con fuerza de ley N° 12, de 1968, del Ministerio de Agricultura; el decreto con fuerza de ley N° 13, de 1968, del Ministerio de Agricultura; el decreto supremo N° 595, de 1932, del Ministerio del Trabajo; el decreto supremo N° 85, del Ministerio del Trabajo; el decreto supremo N° 2.380, de 1948, del ex Ministerio

de Obras Públicas y Vías de Comunicación; el decreto supremo N° 250, de 1958, del Ministerio de Agricultura; el decreto supremo N° 549, de 1964, del Ministerio de Agricultura; el decreto supremo N° 1.044, de 1965, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el decreto supremo N° 497, de 1967, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el decreto supremo N° 1.230, de 1969, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; la ley N° 18.023; el artículo 80 de la ley N° 18.899 y el decreto supremo N° 289, de 1975, del Ministerio de Agricultura."

149.- Agréganse los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 139.- La junta general de socios deberá aprobar previamente toda adquisición, a título oneroso, de cuotas de capital, acciones o derechos sociales de cualesquiera cooperativa o sociedad, en virtud de la cual llegue a tener invertido en una de éstas a lo menos el 10% de su patrimonio.

Artículo 140.- Las operaciones entre las cooperativas y las personas jurídicas señaladas en el artículo precedente deberán observar condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. Los administradores de unas y otras serán responsables de las pérdidas o perjuicios que pudieren causar a la entidad que administren por operaciones hechas con infracción a este artículo.

Lo dispuesto en el inciso precedente será también aplicable a las operaciones que realicen entre sí, las sociedades cuyo capital social pertenezca en, al menos, un 25% a la misma cooperativa.

Artículo 141.- El organismo fiscalizador respectivo podrá examinar todos los libros, cuentas, archivos y documentos de las sociedades que pertenezcan en, al menos, un cincuenta por ciento a una cooperativa, para verificar que los derechos, obligaciones y resultados se reflejen adecuadamente en los informes y estados financieros de la cooperativa.

Artículo 142.- Las cooperativas extranjeras podrán constituir una agencia que opere en territorio nacional, de conformidad a las normas de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas, y quedarán sujetas a las normas de la presente ley en lo que sea pertinente, pero no gozarán de los beneficios tributarios que la ley chilena reconoce a las cooperativas.

Artículo 143.- Serán aplicables a los actos de constitución o de modificación de las cooperativas que se constituyan en el futuro o que se hayan constituido con anterioridad a esta ley, además de las disposiciones específicas que ella contiene sobre saneamiento de vicios de nulidad, las disposiciones de la ley N° 19.499. Para los efectos de dicha ley se entenderá por modificación de la cooperativa tanto la reforma de sus estatutos, como su fusión, división, transformación o disolución, debiendo aplicarse a su respecto los procedimientos y normas establecidos para las sociedades anónimas.”.

150.- Sustitúyese el actual capítulo final “Artículos Transitorios” por el siguiente:

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 1º.- Se continuará aplicando con respecto a las cooperativas de colonización agrícola, agropecuarias de reforma agraria y de reforma agraria, que hayan sido disueltas, voluntaria o forzadamente, con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial de la ley N° 18.755, la letra d) de su artículo 2º transitorio.

ARTICULO 2º.- Las cooperativas en formación, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, respecto de las cuales no se haya dictado el decreto o resolución que autorice su existencia, se ceñirán al procedimiento de constitución establecido en la presente ley.

ARTICULO 3º.- El Departamento de Cooperativas podrá ejercer las facultades que contempla el inciso segundo del artículo 53 de la Ley General de Cooperativas, respecto de las cooperativas que hayan sido disueltas forzadamente antes de la vigencia de esta ley y cuya junta general de socios no haya designado a su comisión liquidadora.

ARTICULO 4º.- Las cooperativas abiertas de vivienda y las de ahorro y crédito actualmente existentes deberán enterar el patrimonio exigido en el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

ARTICULO 5º.- Las cooperativas de vivienda que hayan obtenido créditos hipotecarios con anterioridad a la publicación de esta ley y que no hayan pagado íntegramente su deuda, requerirán el previo consentimiento expreso del acreedor hipotecario para adjudicar en dominio las viviendas a sus socios.

ARTICULO 6º.- Los valores acumulados en fondos de reserva, que en conformidad a las disposiciones de esta ley tenían el carácter de irrepartibles durante la vigencia de la cooperativa, mantendrán dicho carácter, hasta concurrencia del monto expresado en el balance correspondiente al cierre del ejercicio anterior a la fecha de publicación de la presente ley.

ARTICULO 7º.- Las cooperativas que actualmente estén obligadas a constituir un fondo de responsabilidad mantendrán dicha responsabilidad mientras los créditos que lo originan tengan saldo deudor.

El fondo de responsabilidad se incrementará hasta que alcance un 20% del saldo de dividendos por pagar. Los últimos dividendos se podrán pagar con cargo a dicho fondo. En todo caso, se aplicará con respecto a ese fondo lo dispuesto en el artículo 37.

ARTICULO 8º.- Las cooperativas existentes, junto con la primera reforma de estatutos que acuerden, deberán adecuar los mismos a las normas de la presente ley, e inscribir y publicar un extracto del nuevo estatuto, que contendrá las menciones indicadas en los artículos 13 y 14 de este cuerpo legal.

Junto con lo anterior se inscribirá un extracto emitido por el Departamento de Cooperativas, que contenga el acta de la Junta General Constitutiva y sus actas complementarias, rectificatorias o modificatorias. Para estos efectos, el citado Departamento podrá requerir a la Subsecretaría de Agricultura o a otros organismos públicos, los antecedentes relativos a las cooperativas campesinas o de otro tipo, que hayan sido autorizadas por ellos.

En todo caso, las cooperativas sometidas a fiscalización deberán cumplir con lo dispuesto en este artículo dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de la presente ley.

ARTICULO 9º.- Las cooperativas de ahorro y crédito que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en virtud de lo establecido en el artículo 4º transitorio de la Ley General de Bancos, quedarán en la situación descrita en dicho artículo y no podrán realizar las nuevas

operaciones que esta ley autoriza, mientras no hayan cumplido las condiciones señaladas en el artículo 112 bis.

ARTICULO 10.- Las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley tengan el carácter de uniones de cooperativas, se tendrán por el solo ministerio de la ley por federaciones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley.

ARTICULO 11.- La presente ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.”.

“Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley, proceda a fijar el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, con el contenido del Reglamento de Reforma Agraria N° 20, de 1963, el de la presente ley y el de los demás textos legales que se refieran a cooperativas.

El Presidente de la República, al ejercer esta facultad, podrá incorporar las modificaciones y derogaciones que contengan los referidos textos legales, así como los cambios de referencia que sean consecuencia de ellas; reunir en un mismo texto disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas; introducir cambios formales, sea en cuanto a redacción o titulación, a ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, para asegurar la corrección lógica y gramatical de las frases; pero todo ello sólo en la medida que sean indispensables para su coordinación y sistematización.”.

- - - - -

Acordado en sesiones realizadas los días 7, 8 y 15 de mayo pasado, y 5 del mes en curso, con asistencia de los HH. Senadores señores Jovino Novoa Vásquez (Presidente), José García Ruminot, Jorge Lavandero Illanes y Jaime Orpis Bouchon (Marco Cariola Barroilhet), y de los HH. Diputados señores Francisco Encina Moriamez, Carlos Hidalgo González, Enrique Jaramillo Becker, Edgardo Riveros Marín (Eduardo Saffirio Suárez) y Gonzalo Uriarte Herrera.

Sala de la Comisión, a 12 de junio de 2002.

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS
Secretario